

PODER JUDICIAL

Curanilahue, catorce de junio de dos mil veintidós.

VISTO, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

I.- De la Discusión:

PRIMERO: Que, en estos antecedentes **RIT T-4-2022, RUC: 22-4-0381060-K**, comparecen don Rodolfo Aravena Beltrán y Alex Ferrada Cisternas, abogados, en representación de **don (1) Pablo Eduardo Basoalto Rojas; (2) doña Claudia Maritza Arévalo Toloza; doña (3) Sara Magdalena Reyes Ulloa; doña (4) Claudia Maritza Rojas Ayala; doña (5) Katherine Yael Vallejos Navarrete; (6) Alejandra Del Pilar Muñoz Salazar, don (7) Sergio Orlando Gajardo Lagos; don (8) Javier Héctor Matamala Arias; doña (9) Fabiola Soledad Esperguel Silva; don (10) Albercio Bonifacio Aguayo Fernández; doña (11) Jennifer Elisa Jara Carrasco; doña (12) Ángela Belén Navarro Aguayo; don (13) Luis Alberto Ferreira Garrido**, todos cesantes y para estos efectos domiciliados en Almirante Pastene N°185, oficina N°809, comuna de Providencia, deduciendo denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales, indemnización especial del art. 489, despido injustificado, indebido o improcedente, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE**, giro de su denominación, representada legalmente por su alcaldesa doña **ALEJANDRA BURGOS BIZAMA**, ignoro profesión u oficio, o quien haga las veces de tales en virtud del artículo 4 del Código del Trabajo, ambas domiciliadas en calle Arturo Prat N°801, comuna de Curanilahue, en razón de las siguientes consideraciones:

1.- Que, el primero de sus representados, **don PABLO EDUARDO BASOALTO ROJAS**, habría comenzado a prestar sus servicios para el municipio con fecha 21 de julio de 2018, desempeñando sus labores como Encargado de sala de musculación en el Polideportivo de la comuna, funciones que se enmarcaban dentro del área deportiva dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Que, además, el trabajador estaba sujeto a una jornada ordinaria de trabajo, de lunes a viernes, de 15:00 a 21:00 horas, siendo su remuneración, para efectos de término de relación laboral, de \$306.750. Que, asimismo, cabe destacar, que el trabajador se encuentra afiliado a las siguientes instituciones previsionales y de seguridad social: AFP MODELO, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

2.- Que, **doña CLAUDIA MARITZA ARÉVALO TOLOZA**, habría prestado sus servicios bajo subordinación y dependencia para la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, desde noviembre de 2007, desempeñando labores, en un principio, como Docente en Programa de Nivelación y competencias laborales OTEC y posteriormente como Asistente Social en oficinas de vivienda y Egis Municipal, todas labores dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la municipalidad. Que, la trabajadora debía cumplir con una jornada ordinaria de trabajo de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, y el día viernes de 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 16:30 horas, siendo su remuneración de \$999.731. Que, asimismo, cabe destacar, que la demandante se encontraba afiliada a AFP PROVIDA, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.



PODER JUDICIAL

3.- Que, **doña SARA MAGDALENA REYES ULLOA**, habría prestado servicios bajo subordinación y dependencia para la Ilustre Municipalidad de Curanilahue desde el día 01 de julio de 2015, realizando funciones como Técnico en Servicio Social, desempeñándose como Supervisora de trabajadores del programa Proempleo y encargada del programa PADAM. Que, en los primeros años de sus labores, desde el año 2015 al año 2017, debía firmar registro digital de asistencia, situación que cambió con posterioridad, pero que en la práctica se mantenía, ya que debía cumplir con una jornada ordinaria de trabajo de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas y el día viernes de 08:00 a 16:00 horas. Que, su remuneración (para efectos de término de relación laboral) ascendía a la suma de \$869.837. Que, asimismo, cabe destacar, que la demandante se encuentra afiliada a las siguientes instituciones previsionales y de seguridad social: FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

4.- Que, **doña CLAUDIA MARITZA ROJAS AYALA**, habría mantenido un vínculo laboral con la demandada desde el día 31 de diciembre de 2012, desempeñando funciones como Encargada de la Oficina del Adulto Mayor, Encargada comunal del programa Vínculos y Encargada comunal del programa Chile Conecta, todos dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Que, la trabajadora debía cumplir con una jornada ordinaria de trabajo de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, sometiéndose hasta el año 2018, a la firma del registro digital de asistencia. Que la remuneración de la demandante ascendía a la suma de \$883.888. Que, por último, cabe destacar que la trabajadora se encontraba afiliada a AFP PROVIDA, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

5.- Que, **doña KATHERINE Yael VALLEJOS NAVARRETE**, habría prestado servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la Ilustre Municipalidad de Curanilahue desde el día 17 de marzo de 2014, desempeñando funciones como Apoyo profesional, Encargada del área laboral y de tratamiento e integración social de la Oficina SENDA Previene, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario municipal. Que, asimismo, la trabajadora debía cumplir con una jornada laboral ordinaria de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, debiendo firmar asistencia digital entre los años 2016 y 2017. Que, su remuneración (para efectos de término de relación laboral) ascendía a la suma de \$884.241. Que, por último, la demandante se encuentra afiliada a las siguientes instituciones previsionales y de seguridad social: AFP MODELO, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

6.- Que, **doña ALEJANDRA DEL PILAR MUÑOZ SALAZAR**, habría prestado servicios para la demandada Ilustre Municipalidad de Curanilahue, desde el día 01 de enero de 2015, como Coordinadora de la Oficina SENDA Previene, dependiente, como ya hemos dicho, de la Dirección de Desarrollo Comunitario municipal. Que, asimismo, la trabajadora debía cumplir con una jornada laboral ordinaria de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, debiendo firmar asistencia digital entre los años 2016 y 2017. Que, su remuneración (para efectos de término de relación laboral) ascendía a la suma de \$.1.201.536



PODER JUDICIAL

Que, por último, la actora se encuentra afiliada a las siguientes instituciones previsionales y de seguridad social: AFP MODELO, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

7.- Que, **don SERGIO ORLANDO GAJARDO LAGOS**, habría prestado servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada desde el día 02 de mayo de 2019, sin perjuicio de haberse escriturado el contrato tardíamente el día 01 de junio de 2019. Que, nuestro representado desempeñaba sus funciones como Coordinador del programa FNDR, Ejecutor social del programa Habitabilidad y como Encargado del programa Jefas de Hogar, línea independiente, todos programas dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Que, el trabajador debía cumplir con el horario municipal, vale decir, tenía una jornada ordinaria de trabajo de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas. Que, su remuneración (para efectos de término de relación laboral) es de \$1.008.124. Que, por último, cabe destacar, que el demandante se encuentra afiliado a AFP HABITAT, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

8.- Que, **don JAVIER HÉCTOR MATAMALA ARIAS**, habría mantenido un vínculo laboral con la demandada Ilustre Municipalidad de Curanilahue desde el día 01 de mayo de 2014, desempeñando funciones como Encargado del Área de Turismo en la Unidad de Desarrollo Económico Local de la municipalidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Que, en la ejecución de su cargo debía cumplir con el horario municipal, es decir, de lunes a viernes, de 08:00 a 17:30 horas. Que, además, su remuneración, para estos efectos, ascendía a la suma de \$869.837. Que, por último, cabe destacar que el trabajador se encuentra afiliado a las siguientes instituciones previsionales y de seguridad social: AFP PROVIDA, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

9.- Que, **doña FABIOLA SOLEDAD ESPERGUEL SILVA**, habría prestado servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada desde el día 17 de diciembre de 2013, desempeñando labores, en un principio, como Encargada social del programa Habitabilidad, y posteriormente como Apoyo Familiar Integral del programa Familia, del Subsistema de seguridades y oportunidades del Ministerio de Desarrollo social, dependiente municipalmente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Que, la trabajadora debía cumplir una jornada ordinaria de trabajo de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, firmando asistencia digital y con posterioridad en un Libro de asistencia, llevado a cabo por la Coordinadora de dicho programa. Que, la remuneración de la trabajadora ascendía a la suma de \$818.288, y por último, cabe destacar que se encontraba afiliada a AFP PLAN VITAL, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

10.- Que, **don ALBERCIO BONIFACIO AGUAYO FERNÁNDEZ**, habría mantenido un vínculo laboral con la demandada Ilustre Municipalidad de Curanilahue desde julio de 2015, desempeñando funciones de Apoyo en Oficina de Comunicaciones de la municipalidad, siendo trasladado desde agosto de 2021 al Centro cultural municipal, sin designarle labores ni darle instrucciones sobre las tareas a realizar. Que, el trabajador debía cumplir con horarios establecidos, de lunes a viernes, de 14:00 a 17:30 horas, además de



PODER JUDICIAL

realizar turnos los fines de semana de manera alternada, con el objeto de cubrir las actividades municipales llevadas a cabo los días sábados y domingos. Que, su remuneración (para efectos de término de relación laboral) ascendía a la suma de \$354.153. Que, por último, el trabajador se encuentra afiliado a las siguientes instituciones previsionales y de seguridad social: AFP PROVIDA, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

11.- Que, **doña JENNIFER JARA CARRASCO** habría prestado servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la Ilustre Municipalidad de Curanilahue desde el día 01 de febrero de 2018, desempeñando funciones como Apoyo profesional en SENDA y Encargada del área de educación, servicio dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario(DIDECO). Que, la trabajadora debía cumplir con una jornada ordinaria de trabajo, de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas. Que, su remuneración ascendía a la suma de \$442.120 y que se encontraba afiliada a AFP PLAN VITAL, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

12.- **ANGELA BELEN NAVARRO AGUAYO**, habría prestado servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la Ilustre Municipalidad de Curanilahue desde el día 15 de mayo de 2013, desempeñando funciones como Apoyo profesional en la oficina de vivienda y egis municipal. Que, la trabajadora debía cumplir con una jornada ordinaria de trabajo, de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas. Que, su remuneración ascendía a la suma de \$889.182 y que se encontraba afiliada a AFP MODELO, FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

13.- Que, **don LUIS ALBERTO FERREIRA GARRIDO**, habría prestado servicios bajo subordinación y dependencia para la Ilustre Municipalidad de Curanilahue desde el día 01 de abril de 2011, realizando funciones bajo vínculo de subordinación y dependencia, debía firmar registro digital de asistencia, situación que cambió con posterioridad, pero que en la práctica se mantenía, ya que debía cumplir con una jornada ordinaria de trabajo de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas y el día viernes de 08:00 a 16:00 horas. Que, su remuneración (para efectos de término de relación laboral) ascendía a la suma de \$770.578. Que, asimismo, cabe destacar, que se encuentra afiliado a las siguientes instituciones previsionales y de seguridad social: FONASA y al SEGURO DE CESANTÍA.

Que, en virtud de lo señalado precedentemente, todos los trabajadores individualizados habrían prestado sus servicios a la demandada Ilustre Municipalidad de Curanilahue, bajo vínculo de subordinación y dependencia, sin perjuicio de la denominación que hayan tenido sus contrataciones, ya que en los hechos se cumplían con todos y cada uno de los presupuestos que configuran y dan origen a un contrato individual de trabajo, según lo expresamente establecido en el artículo 7 del código del trabajo, es decir, existen obligaciones recíprocas entre las partes contratantes, por un lado los trabajadores se obligaban a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador y este último se obligaba a pagar por estos servicios una remuneración determinada.



PODER JUDICIAL

13.- Que, una de las características propias del contrato de prestación de servicios, que lo diferencia del contrato de trabajo, es la duración del mismo, la cual sólo debe ser la necesaria para la ejecución del servicio, vale decir, se debe tratar de una labor específica que tenga un tiempo determinado, situación que en el caso de autos no sería tal, toda vez que los demandantes desempeñaban sus diversas funciones, a través del pago de honorarios mensuales, mediante contrataciones sucesivas e ininterrumpidas, de a los menos dos años hasta incluso 14 años de servicio.

14.- Que, otra de las características principales del contrato de prestación de servicios, es que el trabajador debe realizar sus funciones por su cuenta, con total independencia. Cosa que tampoco sería tal en autos, ya que, todos los trabajadores mencionados debían cumplir expresamente con las instrucciones que le daba su superior, al encontrarse su trabajo bajo la dependencia de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la municipalidad, además de cumplir con una jornada laboral ordinaria y horarios establecidos, todas obligaciones propias del contrato individual de trabajo.

15.- Que, entonces, en el caso de autos, concurrirían elementos indiciarios de la relación laboral, tales como: A) el cumplimiento de una jornada de trabajo de lunes a viernes, con horarios establecidos; B) la retribución a través de honorarios mensuales; C) el deber de obediencia, traducido en el sometimiento a las órdenes e instrucciones impartidas por su jefe directo y la dirección municipal encargada, realizando así, sus funciones en la forma y condiciones impuestas por estos y; D) la ejecución de estos servicios en virtud de contrataciones sucesivas e ininterrumpidas.

16.- Que, a mayor abundamiento, al existir un vínculo de subordinación y dependencia y, por lo tanto, relación laboral, los y las demandantes tiene derecho a una serie de prestaciones por el término de dicha relación, que se definirán en el siguiente acápite.

ANTECEDENTES DEL DESPIDO:

1.-Que, con fecha 31 de diciembre de 2021, los demandantes fueron despedidos sin invocación de causal legal alguna y sin mencionarles los hechos en que supuestamente se basa dicha decisión.

2.- Que, no se les habría entregado carta formal de despido, sino que sólo habrían tenido conocimiento de su situación por medios informales, y a través de comunicaciones verbales con su empleador, en las cuales tampoco se les habría dado a conocer el motivo real de su desvinculación.

3.- Que, nunca les habrían señalaron, a los demandantes, los hechos en que supuestamente se justificaría su despido, de la manera específica, precisa, concisa y detallada que requiere la comunicación de este, siendo tales hechos del todo ambiguos y genéricos.

4.- Que, detrás del despido masivo de personal llevado a cabo por la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, se encontraría escondido un resquemor por las ideologías que supuestamente representan los trabajadores despedidos, toda vez que se les desvinculó de su puesto laboral, únicamente por haber trabajado con anterioridad bajo la subordinación y dependencia del alcalde precedente.



PODER JUDICIAL

5.- Que, dicha situación habría sido de conocimiento público en los lugares en donde los actores prestaban sus servicios, toda vez que, si bien no fue el motivo formal que la municipalidad dio a conocer al momento de despedirlos, ellos sabrían, al igual que todos los demás empleados de la institución, era su cercanía con el ex Alcalde, siendo perseguidos desde el primer día de la asunción de la nueva alcaldesa quien tanto pública como privadamente manifestó su rechazo a dichos funcionarios, lo cual se había manifestado en cambio de funciones, hostigamientos, privación de trabajo y negación de útiles básicos para desempeñar sus funciones. Es así como su desvinculación sería una manifiesta persecución por simpatizar o adherir a un pensamiento político diverso a las nuevas autoridades.

6.- Que, niegan total y absolutamente que el despido colectivo llevado a cabo por la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, sea procedente y ajustado a derecho, y también niegan que se hayan cumplido los presupuestos legales tanto formales como de fondo que requiere el mismo.

7.- Que, también señalan que el despido llevado a cabo por la empleadora es una vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes, toda vez que se trataría de conductas totalmente discriminatorias en virtud de la supuesta ideología política que representan los trabajadores, los que, como ya mencionamos, sólo fueron despedidos por haber trabajado en el periodo alcaldicio anterior.

CONDUCTAS LESIVAS O VULNERATORIAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES, INDICIOS SUFICIENTES:

1.- Que, el despido sin justificación, sin invocación de causal legal alguna y sin mencionar en forma detallada, clara y específica los hechos en los que supuestamente se basa el mismo, al tiempo de existir un cambio en la autoridad del alcalde, consiste en una clara vulneración, menoscabo y agresión a los derechos fundamentales de los trabajadores despedidos y a los principios de las leyes laborales, toda vez que la empleadora habría incurrido en actos de discriminación en razón de las supuestas ideologías políticas que representaban los demandantes.

2.- Que, es el artículo 2 del Código del Trabajo el que define los actos de discriminación, definiéndolos como las distinciones, exclusiones y preferencias basadas en distintos motivos, mencionando expresamente la opinión política como uno de ellos, la que no puede en ningún caso anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo, situación que fue exactamente la que sucedió en el caso de autos.

3.- Que, el despido masivo llevado a cabo por la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, no sería más que una represalia y sanción por no tener los trabajadores un pensamiento político afín al actual mandato municipal, y no se basaría bajo ninguna circunstancia en el término de las funciones de los trabajadores, su capacidad laboral ni en actitudes que puedan ser objeto de alguna causal legal de despido.

4.- Que, asimismo, la situación descrita atentaría en contra del principio de estabilidad laboral que rige en nuestro país, toda vez que se separó a los trabajadores de su fuente de ingresos, en virtud de



PODER JUDICIAL

situaciones totalmente subjetivas y personales, que no tendrían nada que ver con hechos que pudieran incurrir en alguna causal establecida por la ley para poner término a la relación laboral, vulnerando, de esta manera, el derecho a la Libertad del Trabajo y su protección, consagrado en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República.

5.- Que, en definitiva, la empleadora, habría ejecutado conductas y comportamientos lesivos de derechos fundamentales y contrarios con las leyes laborales, especialmente habría incurrido en actos discriminatorios de los descritos en el artículo 2 del Código del Trabajo y habría vulnerado el derecho a la libertad del trabajo y su protección consagrado en la Constitución Política y amparado por el procedimiento de tutela.

6.- Que, entonces, las prestaciones adeudadas por la demandada, serían las siguientes:

PABLO EDUARDO BASOALTO ROJAS:

- a) \$306.750 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$920.250 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 3 años y 5 meses trabajados.
- c) \$460.125 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$306.750 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$3.374.250 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

CLAUDIA MARITZA ARÉVALO TOLOZA:

- a) \$999.73 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$10.997.041 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los más de 11 años trabajados.
- c) \$5.498.520 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$999.731 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$3.374.250 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo



PODER JUDICIAL

SARA MAGDALENA REYES ULLOA:

- a) \$869.837 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$6.958.696 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 7 años y 7 meses trabajados.
- c) \$3.479.348 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$869.837 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$9.568.207 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

CLAUDIA MARITZA ROJAS AYALA:

- a) \$883.888 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$7.954.992 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 9 años trabajados.
- c) \$3.977.496 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$883.888 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$9.722.768 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo

KATHERINE Yael VALLEJOS NAVARRETE:

- a) \$884.241 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$7.073.928 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 7 años y 9 meses trabajados.
- c) \$3.536.964 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$884.241 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$9.726.651 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de



PODER JUDICIAL

derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

ALEJANDRA DEL PILAR MUÑOZ SALAZAR:

- a) \$1.201.536 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$8.410.752 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 6 años y 7 meses trabajados.
- c) \$4.205.376 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$1.201.536 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$13.216.896 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo

SERGIO ORLANDO GAJARDO LAGOS:

- a) \$1.008.124 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$3.024.372 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 2 años y 7 meses trabajados.
- c) \$1.512.186 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$1.008.124 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$11.089.364 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

JAVIER HÉCTOR MATAMALA ARIAS:

- a) \$869.837 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$6.958.696 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 7 años y 7 meses trabajados.
- c) \$3.479.348 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$869.837 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021



PODER JUDICIAL

e) \$9.568.207 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

FABIOLA SOLEDAD ESPERGUEL SILVA:

- a) \$818.288 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$6.546.304 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 8 años trabajados.
- c) \$3.273.152 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$ 818.288 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$9.001.168 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

ALBERCIO BONIFACIO AGUAYO FERNÁNDEZ:

- a) \$354.153 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$2.124.918 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 6 años y 5 meses trabajados.
- c) \$1.062.459 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$354.153 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$3.895.683 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

JENNIFER JARA:

- a) \$442.120 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$1.768.480 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 3 años y 10 meses trabajados.
- c) \$884.240 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.



PODER JUDICIAL

d) \$442.120 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

e) \$4.863.320 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

ANGELA BELEN NAVARRO AGUAYO:

f) \$834.547 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.

g) \$6.676.376 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 7 años y 7 meses trabajados.

h) \$3.338.188 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.

i) \$834.547 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021.

j) \$9.180.017 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

LUIS ALBERTO FERREIRA GARRIDO:

f) \$770.578 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.

g) \$8.476.358 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 11 años trabajados.

h) \$4.238.179 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.

i) \$883.888 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021.

j) \$8.476.358 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

DE LA NULIDAD DEL DESPIDO:

1.- Que, asimismo, en el caso de autos existiría lo que se denomina Nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social, siendo el requisito esencial y que da su fisonomía a esta nulidad del despido, el hecho de no haberse enterado íntegramente por el empleador todas las cotizaciones



PODER JUDICIAL

previsionales de los trabajadores demandantes, que se hubieren devengado hasta el último día del mes anterior al despido.

2.- Que, se entienden por cotizaciones previsionales no solo aquellas en sentido estricto sensu sino que también las cotizaciones de seguridad social en general, es decir, también las cotizaciones de salud y la correspondiente al seguro de desempleo.

3.- Que, dicha nulidad no produce el efecto de retrotraer a las partes al estado en que se encontraban con anterioridad al despido, sino que la subsistencia para el empleador de la obligación de pagar la remuneración y demás prestaciones pactadas; y la suspensión de la obligación del trabajador a prestar los servicios correspondientes.

4.- Que, entonces, en el caso en cuestión, el despido sería nulo, pues nunca se habrían declarado ni pagado las cotizaciones previsionales y de seguridad social en general, de los demandantes, durante todo el periodo de relación laboral de cada uno de ellos.

En definitiva, y de conformidad a la normativa que invoca, solicitan tener por interpuesta **denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales**, indemnización especial del art. 489, nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE**, giro de su denominación representada legalmente por su alcaldesa doña **ALEJANDRA BURGOS BIZAMA** o quien haga las veces de tal en virtud del artículo 4 del Código del Trabajo, y en suma dar lugar a la demanda en todas y cada una de sus partes y en definitiva solicita se declare:

I. Que, existió relación laboral entre las partes de esta causa;

II. Que, se vulneraron los derechos fundamentales de los demandantes, en particular el derecho a no ser discriminado, el derecho a una relación laboral fundada en la dignidad de la persona y el derecho a la libertad del trabajo y su protección;

III. Que, asimismo, el despido llevado a cabo por la empleadora es nulo, por no pago de las cotizaciones previsionales;

IV. Que, se condena a la demandada al pago de las prestaciones indicadas precedentemente.

13.- Además como consecuencia de la declaración de Vulneración de Derechos fundamentales se obligue a publicar en un diario de circulación regional, correspondiente a la Región del Biobío, que se vulneró por la demandada injustamente el derecho a no ser objetos de actos de discriminación y el derecho a la libertad del trabajo y su protección, como así mismo publicar en lugares visibles donde circule el personal de la empresa que se infringió dichas garantías.

14.- Que, asimismo se lleve a cabo, el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, de todos los demandantes, correspondientes a todo el periodo de relación laboral de cada uno de ellos.



PODER JUDICIAL

15.- Sin perjuicio de lo anterior, también se adeudan las remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y demás prestaciones adeudadas, al declararse nulo el despido por no pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social, desde la fecha del despido hasta su convalidación.

16.- Y, por último, se paguen los Reajustes, intereses y costas de las causas.

17.- En subsidio en el evento de no acreditarse los montos o conceptos reclamados, las sumas mayores o menores y conceptos que el tribunal los fije conforme al mérito de autos.

EN SUBSIDIO DE LAS ACCIONES DEDUCIDAS, y para el evento de que el tribunal resuelva no ha lugar a lo pedido, interponen **demanda en procedimiento ordinario por despido injustificado, indebido o improcedente, nulidad del mismo**, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE**, representada legalmente por su alcaldesa doña **ALEJANDRA BURGOS BIZAMA**, o por quién haga las veces de tal de conformidad al artículo 4 del Código del Trabajo, ambas ya individualizadas en lo principal, y expone:

ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN LABORAL Y DEL DESPIDO:

Que, en virtud del principio de economía procesal, se dan por reproducidos todos y cada uno de los hechos anteriormente descritos en los acápites respectivos de la demanda principal.

DE LA NULIDAD DEL DESPIDO:

1.- Que, asimismo, en el caso de autos existe lo que se denomina Nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social, siendo el requisito esencial y que da su fisonomía a esta nulidad del despido, el hecho de no haberse enterado íntegramente por el empleador todas las cotizaciones previsionales de los trabajadores demandantes, que se hubieren devengado hasta el último día del mes anterior al despido.

2.- Que, se entienden por cotizaciones previsionales no solo aquellas en sentido estricto sensu sino que también las cotizaciones de seguridad social en general, es decir, también las cotizaciones de salud y la correspondiente al seguro de desempleo.

3.- Que, dicha nulidad no produce el efecto de retrotraer a las partes al estado en que se encontraban con anterioridad al despido, sino que la subsistencia para el empleador de la obligación de pagar la remuneración y demás prestaciones pactadas; y la suspensión de la obligación del trabajador a prestar los servicios correspondientes.

4.- Que, entonces, en el caso en cuestión, el despido sería nulo, pues nunca se habrían declarado ni pagado las cotizaciones previsionales y de seguridad social en general, de los demandantes, durante todo el periodo de relación laboral de cada uno de ellos.

En definitiva, y de conformidad a la normativa que invoca, solicitan en subsidio de las acciones deducidas, y ante el evento que se resuelva no ha lugar a lo pedido, tener por interpuesta demanda en procedimiento ordinario por despido injustificado, indebido o improcedente, nulidad del mismo, cobro de



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE, giro de su denominación, representada legalmente por su alcaldesa doña ALEJANDRA BURGOS BIZAMA, o quien haga las veces de tal en virtud del artículo 4 del Código del Trabajo, y en suma dar lugar a la demanda en todas sus partes; declarando en definitiva:

I. Que, existió relación laboral entre los trabajadores demandantes y la Ilustre Municipalidad de Curanilahue;

II. Que, los despidos de autos son injustificados, indebidos o improcedentes;

III. Que, asimismo, los despidos son nulos por no pago de cotizaciones previsionales;

IV. Que, se condena a la demandada a las siguientes prestaciones y cantidades:

(1) PABLO EDUARDO BASOALTO ROJAS:

a) \$306.750 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.

b) \$920.250 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 3 años y 5 meses trabajados.

c) \$460.125 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.

d) \$306.750 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(2) CLAUDIA MARITZA ARÉVALO TOLOZA:

a) \$999.73 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.

b) \$10.997.041 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los más de 11 años trabajados.

c) \$5.498.520 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.

d) \$999.731 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(3) SARA MAGDALENA REYES ULLOA:

a) \$869.837 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.

b) \$6.958.696 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 7 años y 7 meses trabajados.

c) \$3.479.348 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.

d) \$869.837 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(4) CLAUDIA MARITZA ROJAS AYALA:



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

- a) \$883.888 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$7.954.992 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 9 años trabajados.
- c) \$3.977.496 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$883.888 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) \$9.722.768 equivalente a once meses de la última remuneración mensual o por la cantidad de meses y monto que el tribunal determine, por concepto de la indemnización especial adicional, por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido, consagrada en el inciso tercero del artículo 489 del código del Trabajo.

(5) KATHERINE Yael VALLEJOS NAVARRETE:

- a) \$884.241 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$7.073.928 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 7 años y 9 meses trabajados.
- c) \$3.536.964 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$884.241 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(6) ALEJANDRA DEL PILAR MUÑOZ SALAZAR:

- a) \$1.201.536 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$8.410.752 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 6 años y 7 meses trabajados.
- c) \$4.205.376 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$1.201.536 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(7) SERGIO ORLANDO GAJARDO LAGOS:

- a) \$1.008.124 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$3.024.372 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 2 años y 7 meses trabajados.
- c) \$1.512.186 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$1.008.124 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

(8) JAVIER HÉCTOR MATAMALA ARIAS:

- a) \$869.837 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$6.958.696 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 7 años y 7 meses trabajados.
- c) \$3.479.348 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$869.837 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(9) FABIOLA SOLEDAD ESPERGUEL SILVA:

- a) \$818.288 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$6.546.304 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 8 años trabajados.
- c) \$3.273.152 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$ 818.288 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(10) ALBERCIO BONIFACIO AGUAYO FERNÁNDEZ:

- a) \$354.153 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$2.124.918 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 6 años y 5 meses trabajados.
- c) \$1.062.459 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$354.153 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(11) JENNIFER JARA:

- a) \$442.120 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$1.768.480 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 3 años y 10 meses trabajados.
- c) \$884.240 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$442.120 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(12) ANGELA BELEN NAVARRO AGUAYO:

- a) \$834.547 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.



PODER JUDICIAL

b) \$6.676.376 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 7 años y 7 meses trabajados.

c) \$3.338.188 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.

d) \$834.547 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

(13) LUIS ALBERTO FERREIRA GARRIDO:

u) \$770.578 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.

v) \$8.476.358 por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 11 años trabajados.

w) \$4.238.179 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.

x) \$883.888 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021

13.- Que, asimismo se lleve a cabo, el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social de todos los demandantes, correspondientes a todo el periodo de relación laboral de cada uno de ellos.

14.- Sin perjuicio de lo anterior, también se adeudarían las remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y demás prestaciones adeudadas, al declararse nulo el despido por no pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social, desde la fecha del despido hasta su convalidación.

15.- Y, por último, se paguen los Reajustes, intereses y costas de las causas.

SEGUNDO: Que, contestando la demanda comparece **doña Tatiana Fernández Gallardo**, abogada, en representación, según mandato que acompaña, de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE**, RUT N°69.160.200-1, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por su alcaldesa, **doña ALEJANDRA SOLANGE BURGOS BIZAMA**, matrona, todas domiciliadas en Arturo Prat N° 801, Curanilahue, en los siguientes términos:

EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL TRIBUNAL LABORAL.

Las normas relativas a organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia son de Derecho Público, lo que involucra los factores de cuantía, materia y fuero, las que no son renunciables. En consecuencia, tratándose en estos autos de demandas que tienen como sustento contratos que se rigen por las normas del derecho civil, en atención a lo autorizado por la ley 18.883 artículo 4°, el tribunal ante el cual se ha deducido la demanda es absolutamente incompetente en razón de los siguientes argumentos:

1.- El artículo 420 del Código del Trabajo, fija las materias de su competencia y en ella, no se establece la posibilidad de conocer acciones de personas vinculadas a honorarios en contra de algún Servicio Público.



PODER JUDICIAL

2.- Por ser norma de competencia absoluta, su interpretación es restrictiva, por lo que la analogía y/o supletoriedad queda entregada a los casos que el código del ramo expresamente señale u otra ley indique.

3.- Cuando el legislador autoriza una acción laboral en contra de un órgano público, lo señala expresamente, así, el literal e) del artículo 420 del Código del Trabajo, faculta a los juzgados del trabajo para conocer de las “reclamaciones en contra de las autoridades administrativas”, lo que no es materia de estos autos.

4.- Son los propios actores los que reconocerían que los contratos que suscribieron fueron a honorarios, lo que está expresamente autorizado por la ley que se transcribe en los mismos contratos.

5.- La relación contractual en que se fundaría la demanda es regida por el Código Civil y, el artículo 1545 consagra el principio Pacta Sunt Servanda, esto es, el contrato es una ley para las partes y, por lo tanto, debe respetarse.

FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA DEMANDADA.

La legitimación pasiva corresponde al empleador o el que ejerza las facultades del empleador. Según el artículo 3° del Código del Trabajo, empleador es “la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo.” Al respecto se ha señalado lo siguiente:

“La empresa de trabajo temporal -como se le conoce en el derecho español- o empresas de servicios transitorios, (E.S.T.)- como las denomina nuestra legislación- facilitan o suministran sus trabajadores a las empresas usuarias, pero conservando la calidad de empleador. Esto opera del modo siguiente: la empresa suministradora contrata, por tiempo indefinido o por tiempo determinado, a un cliente, delegando la empresa de suministro toda o parte de su autoridad en la empresa usuaria, a través de un contrato de puesta a disposición celebrado entre ambas. La empresa de suministro no es, pues, una empresa de servicios que actúe como contratista respecto de la empresa usuaria, ya que en tal caso no habría puesta del trabajador a disposición de la empresa cliente, sino que la empresa de suministro contratista conservaría su autoridad sobre el mismo”. Palavecino Claudio, Subcontratación, Régimen Jurídico del Trabajo Subcontratado y del Suministro de Personal. Pp., 81-82.

Esta delegación tiene como consecuencia que el empleador real corresponderá a la empresa usuaria y será la que ejerza las facultades de mando y dirección sobre el trabajador y, por ende, es el sujeto pasivo de la acción. El artículo 183-A del Código del trabajo, en su parte pertinente dispone: “Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación del artículo 478”.

En este sentido, las demandantes Katherine Yael Vallejos Navarrete, Alejandra del Pilar Muñoz Salazar y doña Jennifer Elisa Jara Carrasco, prestaban servicios para el programa SENDA, don Sergio



PODER JUDICIAL

Orlando Gajardo Lagos, prestaba servicios para el programa SernamEg y, doña Fabiola Soledad Esperguel Silva, prestaba servicios para el programa FOSIS. La relación que existe entre estos programas y la municipalidad se verifica a través de convenios que pueden o no renovarse cada año, financiando económicamente los programas el servicio prestado por los funcionarios y teniendo la municipalidad sólo la calidad de ejecutante. En tal sentido, queda claro que las funciones que estos demandantes desempeñaban, no corresponden a las habituales de un municipio y se enmarcan en lo estrictamente accidental, dependiendo su permanencia, entre otras condiciones, de la vigencia del convenio. En consecuencia, la municipalidad, siendo sólo el ente ejecutor del programa, esto es, un intermediario que sirve para que los referidos programas logren sus objetivos, no tiene legitimidad pasiva para ser demandada y, por lo tanto, las pretensiones de los actores deben ser dirigidas a los respectivos programas de los que dependían, quienes, a través del convenio, instruyen detalladamente las funciones que los profesionales o prestadores deben cumplir, bajo sus propias reglas, siendo supervisados por ellos y rindiéndole cuenta a ellos. De esta manera, la institución para la cual prestarían los servicios, no es la Municipalidad de Curanilahue, sino el respectivo programa para el que en los hechos y en el derecho prestaban servicios, esto es, Senda, SernamEg y Fosis, en cada caso particular, debiendo haber deducido sus demandas en su contra y no en contra de esta parte.

En subsidio de las excepciones opuestas y para el caso que este tribunal no acoja las excepciones deducidas, contesta la demanda principal en contra de la I. Municipalidad de Curanilahue, solicitando su rechazo total, y expone:

ANTECEDENTES GENERALES DE LA DEMANDA

Los demandantes prestaron servicios a esta municipalidad en las fechas que señalan en su libelo y, hasta el 31 de diciembre de 2021, quienes fueron notificados de la no renovación de sus contratos de prestación de servicios a honorarios a través de carta certificada, enviada al domicilio registrado en sus contratos. El despacho de las cartas certificadas, según documentos que se acompañaran en la etapa procesal pertinente, se realizó con fecha 24 de noviembre de 2021, debiendo, lógicamente, recibirlas materialmente los actores, por lo que no se enteraron del despido por medios informales como argumentan. Por lo demás, no es lógico dejar de asistir al trabajo si no se ha recibido una notificación formal de la no renovación de sus contratos y, ninguno de ellos se presentó en sus puestos de trabajo el 2 de enero de este año. No se señala siquiera comunicación verbal de la no renovación de sus contratos de prestación de servicios por ninguno de los actores. Las razones por la que la municipalidad habría decidido no renovar los contratos de prestación de servicios de los demandantes no se debería a razones políticas, sino que obedece a razones simplemente de desempeño, incurriendo en una serie de faltas que causaban perjuicio a la municipalidad y, por ende, a la comunidad en general. Entre algunos de los motivos que se habrían tenido en cuenta para no seguir contando con los servicios de los demandantes, figuran por ejemplo: escasa proactividad, requisito fundamental cuando se prestan servicios, sin vínculo de subordinación y dependencia,



PODER JUDICIAL

no entregaban información de las actividades realizadas, generaban demoras en los procesos que estaban a su cargo, no se apreciaban progresos o avances en la comuna en las áreas que estaban a su cargo y, en algunos casos incluso tuvieron actitudes desafiantes y conflictivas, no sólo con otros funcionarios del municipio, sino también con usuarios y funcionarios de los programas a los que pertenecían y que fiscalizaban el cumplimiento de los objetivos.

EN CUANTO A LA DEMANDA DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES CON OCASIÓN DEL DESPIDO:

Sin perjuicio de que niegan absolutamente un trato discriminatorio y acosador que denuncian los actores, es necesario tener presente lo siguiente:

1.- La tutela laboral tiene por objeto amparar y proteger ciertos derechos fundamentales de trabajadores contratados bajo las normas del Código del Trabajo. Si bien existe jurisprudencia que acoge acciones de tutela deducidas por funcionarios públicos, regidos por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos, ellas se enmarcan explícitamente en quienes tienen tal calidad. No obstante ello, niegan absolutamente que las no renovaciones de contrato tuvieron encubierto un ánimo de discriminaciones arbitrarias sustentadas en su tendencia política. La razón objetiva por la que ya no se requerirían sus servicios es de orden netamente profesional y se sustentan en los siguientes hechos: Estos funcionarios, desde que asumió la nueva administración, habrían presentado muy poca disposición para conciliar, desinterés en sus labores, lo cual se manifestó en deseos de confrontación altamente negativos. Se tomó la decisión de no renovación de los contratos de prestación de servicios, debido a que, en últimos meses, sin razón aparente, estos funcionarios comenzaron a demostrar poca disposición al trabajo en equipo y al cumplimiento de sus funciones.

La demandante, no habría tenido intención alguna de causar agravio a los actores por razones políticas ni de ninguna otra especie, sino que se estimó que no son necesarios sus servicios, debido a las reiteradas negligencias en su desempeño profesional.

2.- Todos los demandantes no habrían tenido la calidad de funcionarios de la municipalidad, pues los servicios que ellos prestaban no serían propios de la municipalidad y, por lo tanto son accidentales y eventuales, encuadrándose sus respectivos contratos en lo que autoriza el artículo 4° de la ley 18.883, no incurriendo esta parte en ilegalidad alguna, respetando en todas sus partes la legislación vigente en materia administrativa.

3.- La Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ha sido clara en lo relativo a la procedencia de la tutela de derechos fundamentales deducida por prestadores de servicio que no tienen la calidad de funcionarios públicos, como es el caso de los actores, en el fallo de fecha 25 de marzo de 2019, ROL 4.142-2018, el que reproduzco en lo pertinente:



PODER JUDICIAL

“Cuarto: Que, en la presente causa, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad interpuesto por la demandada y, en sentencia de reemplazo, rechazó la denuncia, señalando que se encuentra acreditado que el demandante celebró un contrato a honorarios con la municipalidad demandada, siendo aplicable a dicha relación sus propios estatutos y, por tratarse de una relación de derecho privado, no resultan aplicables las normas contenidas en el Código del Trabajo y, por consiguiente, no resulta procedente demandar de tutela laboral.

Quinto: Que la Ley N° 18.883, que aprueba el estatuto administrativo para funcionarios municipales, establece, en su artículo 4, que: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

Sexto: Que, como se observa, la referida disposición permite la contratación a honorarios, como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.

Séptimo: Que, por su parte, el artículo 1 del Código del Trabajo señala: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código”.

Octavo: Que, entonces, habiéndose establecido que el vínculo jurídico que ligó a las partes fue uno de aquellos definidos en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, consistente, como se dijo, en una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y



PODER JUDICIAL

que tanto las reglas que la rige y los derechos que de ella emanan, conforme al inciso final de dicho artículo, corresponden a los que se establecen en el respectivo contrato, no resultando aplicable la supletoriedad de que trata el inciso tercero del artículo 1 del Código del Trabajo, por tratarse de una relación carácter civil, por lo mismo, no comprendida en aquella disposición.

Noveno: Que, por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso que se analiza, al contener el fallo impugnado la tesis correcta.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante respecto de la sentencia de doce de febrero de dos mil dieciocho, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por la que se acogió el recurso de nulidad interpuesto contra el fallo pronunciado por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, con fecha veinticinco de septiembre dos mil diecisiete.”

Por tanto, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia es clara al rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia en comento, fundado en que, de no ostentar la calidad de funcionario público el actor, no procede aplicar la acción de tutela laboral, cuyo es el caso de autos.

4.- Para el caso que el tribunal estime que existió vínculo laboral de subordinación y dependencia entre los demandantes y esta municipalidad, niegan absolutamente que ella fuere objeto de discriminaciones arbitrarias sustentadas en su tendencia política. La razón objetiva por la que ya no se requieren sus servicios es de orden netamente profesional.

En consecuencia, de acuerdo a lo señalado, no habría existido por parte de la demandada intención alguna de causar agravio a los actores por razones políticas ni de ninguna otra especie, sino que se estimó que no son necesarios sus servicios, debido a las reiteradas negligencias en su desempeño profesional.

EN CUANTO A LAS PRESTACIONES RECLAMADAS:

El estatuto Administrativo no reconoce indemnizaciones por término de labores respecto a un funcionario público, por lo que mal podría inferirse que este proceda respecto de una persona unida con la Administración por un vínculo como es el contrato a honorarios, a menos que esto se pacte en el mismo contrato, cuestión que no ha ocurrido en el caso de autos.

La demandada, en razón de lo ya expuesto, considera improcedentes los rubros demandados por los actores, por cuanto no debiera proceder acogerse la demanda de tutela laboral de derechos fundamentales con ocasión del despido por razones de forma y de fondo. Sin perjuicio de ello señala que es necesario tener presente lo siguiente:

1.- De la indemnización sustitutiva de aviso previo:

Este rubro resulta improcedente, por cuanto, todos los demandantes habrían sido notificados con la debida antelación, de la no renovación de sus contratos de prestación de servicios. Las cartas de despido,



PODER JUDICIAL

habrían sido despachadas a los domicilios informados en la municipalidad por los demandantes con fecha 24 de noviembre de 2021, cumpliendo con creces el plazo que exige la ley para dicho trámite. De este modo, habiendo sido notificados los demandantes con más de 30 días de anticipación de la no renovación de su contrata, no procedería el ítem demandado.

2.- En cuanto a la Indemnización por años de servicio y recargo del 50% de la misma en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo:

Esta indemnización y el recargo demandado por los actores resultaría improcedente, por cuanto ninguno de ellos se rige por las disposiciones del Código del Trabajo, sino por el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Por su parte, el artículo primero del Código del Trabajo, en su inciso 2°, luego de haber referido en el inciso 1° el ámbito de aplicación del cuerpo normativo; señala lo siguiente: “Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.”

3.- En cuanto al feriado legal correspondiente al período 2020 y 2021:

Todos los demandantes exigen el pago del feriado legal correspondiente al período señalado; sin embargo, habrían hecho uso de tal derecho, razón por la cual no correspondería acogerlo.

4.- En cuanto a la indemnización especial por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido:

La Municipalidad de Curanilahue no habría sido causante de vulneración de derechos de los actores, sino que su no renovación de contratas se debió a razones meramente de desempeño, por lo que el tribunal no debería dar lugar a tales indemnizaciones.

EN CUANTO A LA NULIDAD DEL DESPIDO:

En este sentido, señala que sería procedente tener presente las siguientes consideraciones, y desestimar tal demanda:

1.- En primer lugar, no resultaría procedente acoger la demanda de nulidad del despido, por cuanto los actores no se rigen por el Código del Trabajo sino por las leyes estrictamente civiles, autorizado por el artículo 4° de la ley 18.883.

2.- En el caso de autos no hubo despido, sino una no renovación del contrato de prestación de servicios que cada uno tenía, todos los cuales expiraban el 31 de diciembre de 2021.

3.- La Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en fallo de 24 de mayo del año 2021, causa ROL 23.062-2019 sobre unificación de jurisprudencia y, habiendo sido declarada la demanda de declaración de vínculo laboral, ha dicho lo siguiente:



PODER JUDICIAL

“Quinto: Que, respecto de la materia de derecho planteada por la parte demandante, se debe señalar que, si bien se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia, esta Corte considera que no procede unificar jurisprudencia, por cuanto, con similares fundamentos, coincide en la decisión de rechazo de la pretensión relativa a la misma.

En efecto, esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, señalando que, si bien es indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa y, en consecuencia, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado –entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575–, pues, a juicio de esta Corte, en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

Por otro lado, la aplicación –en estos casos–, de la sanción referida, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.”

4.- La sanción de nulidad del despido ha sido prevista para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente de las remuneraciones del trabajador y que no ha enterado los fondos en el organismo de seguridad social respectivo, es decir, no ha cumplido su rol de agente intermediario y que, por ende, ha distraído dineros que no le pertenecían, en finalidades distintas a aquellas para las cuales fueron dispuestos, de modo que se hace acreedor a la imposición de la sanción pertinente, situación que no ocurre en estos autos, pues la mencionada retención y distracción no se produjo.

5.- De acuerdo al artículo 17 del D.L. N° 3500, el pago de las cotizaciones previsionales es de cargo del trabajador, correspondiéndole al empleador sólo su retención y posterior entero en la institución previsional correspondiente, por lo que no es procedente que se solicite que la demandada pague, a su costa,



PODER JUDICIAL

las imposiciones previsionales. Así, si eventualmente se ordenare jurisdiccionalmente su pago, el valor de las mismas deberá descontarse de los emolumentos que correspondiere pagar al actor. Al respecto es importante tener presente que, actualmente, en la declaración de renta anual, el prestador de servicios a honorarios, paga cotizaciones previsionales en forma obligatoria, por lo que condenar a esta parte a pagar todas las cotizaciones previsionales, que no corresponde por cuanto no existe vínculo laboral y tampoco fue demandada su declaración, constituiría un ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, por lo que este pago debe ser desestimado.

Por lo expuesto, no sería posible aplicar las normas del Código del Trabajo en lo referente a las prestaciones demandadas en estos autos, por cuanto ellas se contraponen al régimen especial de la Ley 18.883 y se contradice absolutamente con lo dispuesto en el artículo 1º del Código del Trabajo, que excluye de su ámbito de aplicación a los funcionarios de organismos del Estado, incluyendo a aquellos que en aplicación del artículo 11 del Estatuto Administrativo sean contratados para cometidos específicos bajo la modalidad a honorarios.

En definitiva, solicita tener por contestada la demanda tutela por vulneración de derechos fundamentales, cobro de prestaciones laborales y nulidad del despido deducida por los abogados Rodolfo Aravena Beltrán y Alex ferrada Cisternas, en representación de don Pablo Eduardo Basoalto Rojas, Claudia Maritza Arévalo Toloza, Sara Magdalena Reyes Ulloa, Claudia Maritza Rojas Ayala, Katherine Yael Vallejos Navarrete, Alejandra del Pilar Muñoz Salazar, Sergio Orlando Gajardo Lagos, Javier Héctor Matamala Arias, Fabiola Soledad Esperguel Silva, Albercio Bonifacio Aguayo Fernández, Jennifer Elisa Jara Carrasco, Ángela Belén Navarro Aguayo y Luis Alberto Ferreira Garrido, todos individualizados en autos, en los términos precedentemente expuestos, solicitando rechazar la demanda en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

II.- De la Prueba:

TERCERO: Que, en audiencia preparatoria se llamó a las partes a conciliación la que no se produce.

Fijándose como convenciones probatorias la siguiente:

1.- Fecha de inicio y fecha de término de la relación contractual entre los demandantes y la demanda de autos.

Fijándose como hechos a probar los siguientes:

1.- Competencia del tribunal.

2.- Legitimación pasiva de la demanda deducida por doña Katherine Vallejos Navarrete, doña Alejandra Muñoz Salazar, Jenifer Jara Carrasco, Sergio Carrasco Lagos y doña Fabiola Esperguel Silva.

3.- Naturaleza del vínculo contractual entre los demandantes y la demandada. Estipulaciones del mismo.



PODER JUDICIAL

4.- Efectividad que el despido es vulneratorio de garantías constitucionales en la forma descrita en la demanda, discriminatorios por opiniones políticas, infringiendo el artículo 2 del Código del Trabajo, infringiéndose de igual manera los artículos 19n°16 y 19n°2 de nuestra carta fundamental. En ese caso, indicios de la vulneración.

5.- Necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada por la denunciada.

6.- Efectividad de adeudarse a los demandantes las prestaciones e indemnizaciones demandadas. Naturaleza y monto de las mismas.

7.- Efectividad que el despido es justificado. En su caso cumplimiento de lo estipulado en el artículo 162 del Código del Trabajo. Hechos que constituyen la causal del despido invocado.

8.- Procedencia de la nulidad del despido demandado.

CUARTO: Que, la parte demandante a fin de acreditar su pretensión, incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental:

1.- Boleta electrónica de honorarios de fecha noviembre 2021 a nombre de Albercio Bonifacio Aguayo Fernández. Folio 6

2.- 2 (dos) Boletas electrónicas de honorarios de fecha noviembre 2021 a nombre de Alejandra del Pilar Muñoz. Folio 7

3.- 2 (dos) Boletas electrónicas de honorarios de fecha diciembre 2021 a nombre de Alejandra del Pilar Muñoz. Folio 8

4.- Boleta electrónica de honorarios de fecha noviembre 2021 a nombre de Ángela Navarro. Folio 9

5.- Boleta electrónica de honorarios de fecha diciembre 2021 a nombre de Ángela Navarro. Folio 10

6.- Boleta electrónica de honorarios de fecha noviembre de 2021 a nombre de Claudia Arévalo. Folio 11

7.- Boleta electrónica de honorarios de fecha diciembre de 2021 a nombre de Claudia Arévalo. Folio 12

8.- Boleta electrónica de honorarios de fecha noviembre de 2021 a nombre de Claudia Rojas. Folio 13

9.- Boleta electrónica de honorarios de fecha diciembre de 2021 a nombre de Claudia Arévalo. Folio 14

10.- Carta de no renovación de contrato de fecha 23 de noviembre de 2021 a nombre de Claudia Rojas. Folio 15

11.- Boleta electrónica de honorarios de fecha noviembre de 2021 a nombre de Fabiola Esperguet. Folio 16



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

12.- Boleta electrónica de honorarios de fecha diciembre de 2021 a nombre de Fabiola Esperguel.

Folio 17

13.-Boleta electrónica de honorarios de fecha noviembre de 2021 a nombre de Javier Matamala.

Folio 18

14.- 2 (dos) Boletas electrónicas de honorarios de fecha noviembre 2021 a nombre de Jennifer Jara.

Folio 19

15.- 2 (dos) Boletas electrónicas de honorarios de fecha diciembre 2021 a nombre de Jennifer Jara.

Folio 20

16.- 2 (dos) Boletas electrónicas de honorarios de fecha noviembre 2021 a nombre de Katherine Vallejo. Folio 21

17.- 2 (dos) Boletas electrónicas de honorarios de fecha diciembre 2021 a nombre de Katherine Vallejo. Folio 22

18.- Boleta electrónica de honorarios de fecha noviembre de 2021 a nombre de Luis Ferreira. Folio 23

19.- Boleta electrónica de honorarios de fecha noviembre de 2021 a nombre de Pablo Basoalto. Folio 24

20.- Contrato de prestación de servicio de fecha julio 2021 a nombre de Sara Reyes. Folio 25

21.- Boleta electrónica de honorarios de fecha diciembre de 2021 a nombre de Sara Reyes. Folio 26

22.- 2 (dos) Boletas electrónicas de honorarios de fecha noviembre 2021 a nombre de Sergio Gajardo. Folio 27

23.- 2 (dos) Boletas electrónicas de honorarios de fecha diciembre 2021 a nombre de Sergio Gajardo. Folio 28

24.- Contrato de trabajo de fecha 2014 Javier Matamala. Folio 32

25.- Contrato de trabajo de fecha 2015 Javier Matamala. Folio 33

26.- Contrato de trabajo de fecha 2016 Javier Matamala. Folio 34

27.- Contrato de trabajo de fecha 2017 Javier Matamala. Folio 35

28.- Contrato de trabajo de fecha 2018 Javier Matamala. Folio 36

29.- Contrato de trabajo de fecha 2019 Javier Matamala. Folio 37

30.- Contrato de trabajo de fecha 2020 Javier Matamala. Folio 38

31.- Certificado de antigüedad a nombre de Javier Matamala. Folio 39

Confesional:

Alejandra Burgos Bizama, cédula de identidad N°13.389.115-3, Alcaldesa de Curanilahue, domiciliada en Arturo Prat N°801, Curanilahue, declara que: conoce a los demandantes en general, individualiza a algunos y agrega que todos estaban vinculados por medios de contratos a honorarios.



PODER JUDICIAL

Respecto del horario, señala que desconoce la situación de los horarios pero reconoce que pueden estar presentes en los mismos horarios que los funcionarios porque esos son los horarios de funcionamiento de las oficinas y atención a público, entendiendo que no tienen obligación de cumplir horario.

Reconoce que los usuarios no distinguen a los funcionarios a honorario respecto de los de planta, no existe una diferencia externa; sabe que la administración anterior les entregó chaquetas o polar con el escudo de la Municipalidad pero esa no sabe si esa es una práctica común de las administraciones municipales, pero que indistintamente funcionarios a planta o contrata y a honorarios usaban esa vestimenta distintiva.

Sobre la obligación de asistencia diaria y cumplimiento de horario varía y depende de cada contrato porque “no todas las personas que prestan servicios a honorarios lo hacen en las dependencias de la Municipalidad”. (SIC)

En relación a los actores, sabe que Claudia Rojas sí asistía a la Municipalidad a prestar sus servicios, pero ese cargo dependía de la DIDECO, sí la vio “no todos los días, pero sí en actividades con adultos mayores, presentando proyectos, desarrollando las actividades relacionadas con éstos” (SIC). Entiende que es Asistente Social o debería serlo.

Testimonial:

Beatriz Susana Arnado Vásquez, cédula de identidad N°10.724.505-7, divorciada, funcionaria pública, domiciliada en Ramón Zamora N°206 Curanilahue. Declara que comparece a prestar su declaración por el despido injustificado de algunos trabajadores, los nombra, y la Municipalidad que era su empleadora.

Los conoce porque eran sus colegas, funcionarios públicos como ella, se trata de trabajadores dependientes que debía cumplir horario, recibían instrucciones, se les entregaban elementos de vestuario con el escudo de la Municipalidad, les correspondía evacuar informes de trabajo como todos los funcionarios de la Municipalidad, en “la calidad de funcionarios públicos que éramos todos”. (SIC).

Cumplían sus funciones en distintas oficinas del Municipio, las que están a cargo de los distintos directores que eran los jefes directos.

En cuanto a los funcionarios de SENDA, declara que todos cumplían distintas funciones que incluyen aquellas que “cumplíamos todos en la municipalidad” (SIC). Debían dar cumplimiento al horario de 08:30 a 17:30 horas, de lunes a viernes, dependían directamente de DIDECO, debían justificar sus inasistencias, tenían derecho a hacer uso de permisos, no podían ausentarse dentro de la jornada de trabajo y, realizar sus funciones y dar cuenta a través de los informes que se presentaban a sus jefes directos.

La testigo era Jefe de Gabinete, en esa calidad respondían directamente frente al Alcalde, y debían requerir los informes a las distintas oficinas o bien, bajo la instrucción del Alcalde, debía rendirse cuentas personalmente. (No a través de informes).

El hecho que los actores generaren atrasos en sus horarios de asistencia, o bien cumplieran las funciones dentro de los lineamientos que debían ejecutarse, era evaluado por los Directores y por el Alcalde.



PODER JUDICIAL

La jefatura tomaba conocimiento de las evaluaciones, a través de los informes, ya que cada uno de los demandantes cumplían diversas funciones, en área de vivienda, atención y visita a los usuarios (FOSIS), y la oficina del Adulto Mayor.

Los informes a que hace referencia eran informes diarios, semanales y mensuales. Las especificaciones eran analizadas y canalizadas en reuniones semanales. Se presentaban directamente a los Directores.

Conoce a los trabajadores demandantes desde que ingresa a prestar servicios en el año 2013, quienes realizaban funciones que ya eran ejecutadas por el Municipio “desde siempre” (SIC).

En cuanto al término de los contratos señala que obedeció “a un tema netamente político porque todos participaron en la campaña del anterior alcalde” (SIC).

El alcalde saliente era un candidato independiente pero apoyado por Chile Vamos, y la actual alcaldesa era independiente.

“Existe una lista con los nombres de los funcionarios identificados de participar en la campaña”. (SIC). Identificación que se realizaba por medio de fotografías de manera que “si estábamos en las fotografías estábamos en esa lista” (SIC).

“Yo sufrí acoso laboral de la Administración entrante a través del nuevo Jefe de Gabinete, quien me dio un portazo” (SIC).

Expone que un funcionario “sufrió presión, y mostró las fotografías y nombres” de quienes participaron en la campaña del ex alcalde. “Iban a cada una de las oficinas, nos aislaban, nos quitaron las claves de acceso al sistema, nos quitaron los teléfonos institucionales o números asignados por medio de los cuales los usuarios se comunicaban con ellos, nos quitaron recursos, todo lo cual incidía en nuestro trabajo, recibimos portazos en respuestas y fue una constante hasta ahora. Iban a nuestras oficinas y nos preguntaban uno a uno qué funciones cumplíamos, de todo lo que tomaba nota el Jefe de Gabinete.” (SIC).

Agrega, Gabriel Rodríguez es el encargado de Comunicaciones, “y fue quien sufrió presión para lograr identificar a cada uno de los funcionarios que participaron en la campaña, lo obligaron a entregar las fotografías”. (SIC).

“Finalmente, el resultado de estas presiones fueron los despidos, yo no porque soy funcionaria de planta y actualmente cumple funciones en la Dirección de Tránsito”. (SIC).

Contrainterrogada, ratifica que los trabajadores desvinculados tenían obligación de asistencia de lunes a viernes y cumplir el horario, realizar informes de trabajo. Todas las situaciones narradas precedentemente se circunscribieron desde junio a diciembre del año 2021.

Si no se cumplían con la asistencia o con el horario, existían sanciones que eran ejecutadas directamente por los respectivos Directores. Los funcionarios a honorarios eran evaluados directamente por sus jefes, evaluación a través de una nota, y esta calificación va en directa relación al trabajo realizado.



PODER JUDICIAL

Aclara que conoce a todos los demandantes, algunos dependían de DIDECO, de este grupo, algunos cumplían funciones para SENDA, SENDA Previene, FOSIS y SERNAMEG, que son programas o Convenios que se realizaban funciones propias del Municipio.

Indica que éstos “son programas contratados por la Municipalidad para prestar servicios a la comunidad. Son convenios” (SIC)

La función de estos convenios es prestar servicio directamente con la Municipalidad, donde “cada parte aporta, los programas el financiamiento y la Municipalidad efectúa las contrataciones”. (SIC).

En caso que no se celebre el convenio, se puede prestar el servicio en la medida que el Municipio pueda financiarlos, porque el personal “es todo contratado por la Municipalidad” (SIC).

Los programas “establecen los lineamientos técnicos, lineamientos programáticos definidos previamente, y se contratan porque el financiamiento municipal es escaso y no se alcanza a financiar a cada usuario” (SIC).

El objeto de los informes es conocer si los funcionarios ejecutaban las funciones para las cuales han sido contratados.

Se le consulta en relación a Gabriel Rodríguez, aclarando que se mantiene con contrato vigente, y dentro de sus funciones cubría los eventos que se realizaban a propósito de la campaña electoral.

Sobre las razones expuestas para poner término a los contratos, señala que “prestaban un mal trabajo, un pésimo trabajo” (SIC). Sin embargo, se señaló como causal de término la “no renovación de sus contratos” (SIC). La mayoría de los “colegas despedidos llevaban más de cuatro años trabajando para la Municipalidad”.

“El convenio SENDA sigue vigente, pero no es capaz de prestar servicios a los usuarios como lo hacían los trabajadores desvinculados, ya que todos aquellos que se desempeñaban en ese programa fueron despedidos” (SIC).

Claudio Andrés Peñailillo Gutiérrez, cédula de identidad N°16.215.835-K, abogado, Director Administración y Finanzas I. Municipalidad Curanilahue, casado, domiciliado en Juan Benítez Meza N°1381, Curanilahue. Declara que es Director desde enero de 2018. Conoce a los demandantes porque eran funcionarios municipales, tenían contrato con la municipalidad y le correspondía ver el tema de sus pagos.

Los demandantes se desempeñaban por medio de contratos a honorarios, dependiendo directamente de cada una de las Direcciones en las que prestaban sus servicios. Cumplían horario desde las 8:30 a 17:30, de lunes a viernes, recibían instrucciones de sus superiores jerárquicos, debían cumplir con los planes de trabajo aprobados, cada uno tenía asignada una oficina para prestar sus servicios y debían ejecutar los proyectos que se les encargaban (a las distintas direcciones).

Dependían de DIDECO, prestaban servicios debiendo cumplir asistencia y horario, recibían instrucciones verbales, por correos electrónicos, además de las indicadas en cada uno de sus contratos.



PODER JUDICIAL

Los directores debían revisar y evaluar el trabajo. Los funcionarios evacuaban informes mensuales que eran entregados directamente a los Directores. Si no se cumplían el programa había sanciones, llamados de atención.

Tenían derecho a hacer uso de días de permiso, vacaciones 15 días, debían cumplir su jornada diaria o si no, había descuentos.

En cuanto a la causa de la desvinculación, señala que “se hizo a través de una carta porque tenían una mala evaluación de sus jefes directos, eso en lo formal, porque la razón es la participación en la campaña electoral del ex alcalde, y se señala que hay una evaluación deficiente para intentar cumplir con los dictámenes de la Contraloría, y hacer calzar las razones en dicho dictamen” (SIC).

Agrega que la nueva administración nos llamaba “los fachos o fachos pobres” (SIC) “hicieron circular una lista con todos los fachos pobres que serían despedidos por haber participado en la campaña del ex alcalde”. (SIC).

El 28 de junio de 2021 asume la nueva administración, y con ello fueron segregados, separados del resto de los funcionarios “había una persecución, un rechazo, se veían a colegas llorando por los malos tratos, los iban a acusar, los acosaban” (SIC).

Los funcionarios, dentro de los cuales están los demandantes sufrieron este trato vejatorio de ser llamados y segregados como “fachos pobres” (SIC), en reiteradas oportunidades.

Agrega que, esto le consta porque cuando llega la nueva administración, “comenzó a circular una lista con los nombres de estos funcionarios, que fue enviada a Personal para ser despedidos, nombres de funcionarios que participaron en la campaña.” (SIC). Reconoce que no vio la lista pero sí escuchó sobre ella.

Las funciones que se cumplían algunos demandantes, a través de los programas, “eran funciones o funciones ejecutadas por la Municipalidad desde siempre, porque son servicios que debe prestar la municipalidad”. (SIC).

Contrainterrogado, se le consulta si la obligación de cumplir horario estaba en los contratos, señala que depende del año del contrato, y que desde el año 2017 no es una obligación contenida en los contratos, sino una obligación instruida directamente por los directores.

Respecto de los funcionarios que prestaban funciones en SENDA, señala que estos eran funcionarios contratados por la Municipalidad. El ente edilicio celebra convenios con otros organismos públicos, en virtud de los cuales proporcionan financiamiento, entregando ciertas directrices y obligaciones que deben ser cumplidas por los contratantes.

La Municipalidad debe rendir cuenta del financiamiento y el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Los convenios son fundamentales por el financiamiento que entregan y permiten cumplir las funciones de la Municipalidad.



PODER JUDICIAL

En cuanto a la llamada <Lista Negra> expone que se trata de los nombres de los funcionarios llamados <fachos pobre> y que coinciden con los trabajadores desvinculados. Reconoce que en esa lista también hay nombres que no fueron alcanzados por la desvinculación, por cuanto su calidad jurídica es de planta. Finalmente desconoce si hay funcionarios a honorarios en esa situación.

Luis Orlando Villalobos Ulloa, cédula de identidad N°12.765.272-4, casado, periodista, Director Tránsito I. Municipalidad Curanilahue, domiciliado en Ignacio Carrera Pinto N°181, Curanilahue. Declara que conoce a las partes del juicio, por un lado la Municipalidad y por otro “los colegas que fueron despedidos a fines del año pasado” (SIC). Dentro de los cuales están: la Encargada del Programa de Adulto Mayor, aquellos que se desempeñaban en la oficina de Vivienda, SENDA Previene, PMU, SERNAMEG, Programa de Mujer Trabajadoras y Jefas de Hogar, todos dependientes de la Municipalidad.

“Me correspondió recibirlos porque yo era el Administrador Municipal, sus funciones se desempeñaban cabalmente, se les veía comprometidos con sus funciones y con la Municipalidad”. (SIC).

Cada uno de ellos, tenían un jefe directo la mayoría dependía de DIDECO, otros del Departamento de Comunicaciones y de la Administración Municipal, de quienes recibían instrucciones directas; llamados de atención; dar cuenta del cumplimiento de sus horarios y asistencia. Agrega que, respecto de la asistencia y cumplimiento de horario, la obligación se establecía directamente en los contratos, ello desde el año 2012 al 2017, posteriormente era supervisado por cada Director.

Agrega que, le constan estos hechos por cuanto se desempeñó como administrador municipal de manera regular en carácter titular y posteriormente en carácter de subrogante.

El horario era de 8:30 a 17:30 en las dependencias de la Municipalidad. La mayoría de los funcionarios vestía de manera libre, sin embargo se les proporcionaba vestimenta o ropa institucional o distintiva, por un concepto de imagen del ente edilicio. No existía a nivel externo, distinción entre los funcionarios, son funcionarios municipales frente a la comunidad.

En los contratos, aparecía la referencia a utilización de vestuario institucional, el uso de un teléfono institucional, derecho a permisos administrativos pagados, vacaciones. Esto hasta el año 2017.

Los demandantes fueron despedidos en diciembre de 2021. “Se les desvinculó por razones eminentemente políticas, y se dijo que había sido resultado de una evaluación, pero que no existió.” (SIC).

En cuanto a la evaluación declara que “como administrador municipal subrogante sé que no existió” (SIC).

Contrainterrogado, expone que no recuerda si obligación de cumplir horario después de 2017 estaba en los contratos, pero era una obligación inherente al tratarse de oficinas que cumplían atención de público, y debía velarse por el correcto cumplimiento de ello.

Aclara que hay una evaluación que se realiza respecto de la institución propiamente tal, pero no hay una evaluación establecida por ley. “Ese fue el argumento que se dio frente a la opinión pública” (SIC), porque



PODER JUDICIAL

siempre hay casos en que pueda existir una evaluación deficiente que no se circunscribe a los trabajadores de planta o a contrata.

Los demandantes se desempeñaban en la ejecución de diversos programas: SENDA, SENDA Previene que establecían requisitos específicos o exigencias en cuanto a lineamientos por ejemplo la calidad de los profesionales que debía cumplir dichas funciones, pero desde el punto de vista institucional, los actores “prestaban servicios contratados por la Municipalidad”. (SIC).

Los convenios por medio de los cuales se ejecutan los distintos programas, deben cumplir con los objetivos específicos respecto de los cuales se compromete la Municipalidad, correspondiendo a la Directora de Desarrollo Comunitario supervisar ese cumplimiento. Es la DIDECO quien se relaciona con el Alcalde, y el coordinador regional o provincial de cada programa.

El Convenio señala las directrices que deben seguirse en su ejecución, que se traducen en beneficio directo de la comunidad.

Pericial:

Gloria Pamela Carrasco Sanhueza, R.U.N N°15.855.885-8, profesión psicóloga quien expone informe perito de folios 65 y 66. Expone la metodología: entrevista clínica de 160 minutos, aplicación del Cuestionario SCL-90-R y Evaluación IPDE.

Es psicóloga, con cinco diplomados en el área pericial y post- títulos relacionados con Infancia. Es perito registrado, en la Corte de Apelaciones de Concepción hace 8 años y actualmente perito externa respecto de las otras Cortes.

Exhibición documental:

Todos los contratos, anexos, liquidaciones de remuneraciones, registro de asistencia de los demandantes desde el inicio de la relación laboral hasta al término de dicha relación, con el objeto de probar la relación de subordinación y dependencia entre ellos.

- 1.- Registro asistencia Alejandra Muñoz. Folio 80
- 2.- Registro asistencia Angela Navarro. Folio 81
- 3.- Registro asistencia Claudia Arevalo. Folio 82
- 4.- Registro asistencia Claudia Rojas. Folio 83
- 5.- Registro asistencia Fabiola Esperquel. Folio 84
- 6.- Registro asistencia Javier Matamala. Folio 85
- 7.- Registro asistencia Katherine Vallejos. Folio 86
- 8.- Registro asistencia Luis Ferreira. Folio 87

Oficios: Consistentes en Previred de la partes demandantes.

- 1.- Previred Alejandra Muñoz. Folio 66
- 2.- Previred Claudia Rojas. Folio 67



PODER JUDICIAL

- 3.- Previred Albercio Aguayo. Folio 68
- 4.- Previred Claudia Arevalo. Folio 69
- 5.- Previred Pablo Basualto. Folio 70
- 6.- Previred Fabiola Esperguel. Folio 71
- 7.- Previred Sergio Gajardo. Folio 72 y 73 (repetidas)
- 8.- Previred Jennifer Jara. Folio 74
- 9.- Previred Javier Matamala. Folio 75
- 10.- Previred Angela Navarro. Folio 76
- 11.- Previred Katherine Vallejos. Folio 77
- 12.- Previred Luis Ferreira. Folio 78

QUINTO: Que, la demandada, por su parte, incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental:

Decretos y contratos de prestación de servicios de los demandantes y carta comprobante de no renovación de contrato. Folio 48 a 64.

- 1.- Decreto N° 3.277 de fecha 29 de mayo de 2013.
- 2.- Contrato de prestación de servicios de fecha 15 de mayo de 2013
- 3.- Decreto N° 1.444 de fecha 31 de diciembre de 2014.
- 4.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2014
- 5.- Decreto N° 1.051 de fecha 30 de junio de 2015.
- 6.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 julio de 2015
- 7.- Decreto N° 1.462 de 31 de diciembre de 2015.
- 8.- Contrato de prestación de servicios de 31 de diciembre de 2015.
- 9.- Decreto N° 1.644 de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 10.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 11.- Decreto N° 1.019 de fecha 30 de junio de 2017.
- 12.- Contrato de prestación de fecha 30 de junio de 2017.
- 13.- Decreto N° 1.431 de fecha 29 de diciembre de 2017.
- 14.- Contrato de prestación de fecha 29 de diciembre de 2017.
- 15.- Decreto N° 8.269 de fecha 06 de agosto de 2018.
- 16.- Modificación contrato de prestación de servicios de fecha 06 de agosto de 2018.
- 17.- Decreto N° 1.614 de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 18.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 19.- Decreto N° 1.959 de fecha 31 de diciembre de 2019.
- 20.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019.



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

- 21.- Decreto N° 854 de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 22.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 23.- Decreto N°2.958 de fecha 06 de mayo de 2014.
- 24.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de mayo de 2014.
- 25.- Decreto N°1.457 de fecha 31 de diciembre de 2014.
- 26.- Decreto N°800 de fecha 31 de marzo de 2015.
- 27.- Decreto N°800 de fecha 31 de marzo de 2015.
- 28.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de abril de 2015
- 29.- Decreto N°1.058 de fecha 30 de junio de 2015.
- 30.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2015.
- 31.- Decreto N°1.231 de fecha 01 de octubre de 2015.
- 32.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de octubre de 2015.
- 33.- Decreto N°1.471 de fecha 31 de diciembre de 2015.
- 34.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2015.
- 35.- Decreto N°6.294 de fecha 22 de julio de 2016.
- 36.- Contrato de prestación de servicios de fecha 22 de julio de 2016.
- 37.- Decreto N°1.653 de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 38.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 39.- Decreto N°4.836 de fecha 06 de julio de 2017.
- 40.- Contrato de prestación de servicios de fecha 06 de julio de 2017.
- 41.- Decreto N°1.442 de fecha 29 de diciembre de 2017.
- 42.- Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de diciembre de 2017.
- 43.- Decreto N° 1.626 de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 44.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 45.- Decreto N° 1.969 de fecha 31 de diciembre de 2019
- 46.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019.
- 47.- Decreto N° 867 de fecha 31 de diciembre de 2020
- 48.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 49.- Decreto N° 4.617 de fecha 17 de julio de 2013.50
- 50.- Contrato de prestación de servicios de fecha 27 de junio de 2013.
- 51.- Decreto N° 1.452 de fecha 31 de diciembre de 2014
- 52.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2014.
- 53.- Decreto N° 925 de fecha 09 de febrero de 2015.
- 54.- Contrato de prestación de servicios de fecha 02 de febrero de 2015.



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

- 55.- Decreto N° 5.796 de fecha 18 de agosto de 2015.
- 56.- Contrato de prestación de servicios de fecha 18 de agosto de 2015.
- 57.- Decreto N° 1.210 de fecha 16 de febrero de 2016.
- 58.- Contrato de prestación de servicios de fecha 02 de enero de 2016.
- 59.- Decreto N° 2.154 de fecha 22 de marzo de 2016.
- 60.- Contrato de prestación de servicios de fecha 22 de marzo de 2016.
- 61.- Decreto N° 11.780 de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 62.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 63.- Decreto N° 10.034 de fecha 29 de diciembre de 2017.
- 64.- Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de diciembre de 2017.
- 65.- Decreto N° 1.239 de fecha 07 de febrero de 2018
- 66.- Contrato de prestación de servicios de fecha 07 de febrero de 2018.
- 67.- Decreto N° 1.621 de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 68.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 69.- Decreto N° 14.767 de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 70.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 71.- Decreto N° 14.077 de fecha 31 de diciembre de 2019.
- 72.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019.
- 73.- Decreto N° 7.037 de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 74.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 75.- Decreto N° 860 de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 76.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 77.- Decreto N° 10.386 de fecha 31 de diciembre de 2014.
- 78.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2014.
- 79.- Decreto N° 1.578 de fecha 17 de marzo de 2014.
- 80.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de marzo de 2014.
- 81.- Decreto N° 5.796 de fecha 18 de agosto de 2015.
- 82.- Contrato de prestación de servicios de fecha 18 de agosto de 2015.
- 83.- Decreto N° 11.779 de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 84.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 85.- Decreto N° 2.154 de fecha 22 de marzo de 2016.
- 86.- Contrato de prestación de servicios de fecha 22 de marzo de 2016.
- 87.- Decreto N° 1.211 de fecha 16 de febrero de 2016
- 88.- Contrato de prestación de servicios de fecha 02 de enero de 2016.



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

- 89.- Decreto N° 10.035 de fecha 29 de diciembre de 2017
- 90.- Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de diciembre de 2017.
- 91.- Decreto N° 1.693 de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 92.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 93.- Decreto N° 14.768 de fecha 31 de diciembre de 2018
- 94.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 95.- Decreto N° 1.240 de fecha 07 de febrero de 2018.
- 96.- Contrato de prestación de servicios de fecha 07 de febrero de 2018.
- 97.- Decreto N° 1.257 de fecha 06 de febrero de 2020.
- 98.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019.
- 99.- Decreto N° 420 de fecha 02 de marzo de 2020
- 100.- Contrato de prestación de servicios de fecha 02 de marzo de 2020.
- 101.- Decreto N° 585 de fecha 02 de julio de 2020.
- 102.- Contrato de prestación de servicios de fecha 02 de julio de 2020.
- 103.- Decreto N° 3.868 de fecha 09 de julio de 2020.
- 104.- Contrato de prestación de servicios de fecha 26 de junio de 2020.
- 105.- Decreto N° 7.038 de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 106.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 107.- Decreto N° 861 de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 108.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 109.- Decreto N° 3.967 de fecha 11 de junio de 2014
- 110.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de junio de 2014
- 111.- Decreto N° 1477 de fecha 31 de diciembre de 2014.
- 112.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2014
- 113.- Decreto N° 1065 de fecha 01 de julio de 2015
- 114.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2015
- 115.- Decreto N° 1.492 de fecha 31 de diciembre de 2015
- 116.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2015
- 117.- Decreto N° 1.668 de fecha 30 de diciembre de 2016
- 118.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 119.- Decreto N° 832 de fecha 31 de enero de 2017
- 120.- Modificación contrato honorarios de fecha 31 de diciembre de 2017.
- 121.- Decreto N° 1.456 de fecha 29 de diciembre de 2017
- 122.- Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de diciembre de 2017



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

- 123.-.- Decreto N° 1.645 de fecha 31 de diciembre de 2018
- 124.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018
- 126.- Decreto N° 1.986 de fecha 31 de diciembre de 2019
- 127.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019
- 128.- Decreto N° 882 de fecha 31 de diciembre de 2020
- 129.- Contrato de prestación de servicios de 31 de diciembre de 2020.
- 130.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2012
- 131.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2013
- 132.- Decreto N° 1.464 de fecha 31 de diciembre de 2014.
- 133.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2014.
- 134.- Decreto N° 1.480 de fecha 31 de diciembre de 2015.
- 135.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2015
- 136.- Decreto N° 1.059 de fecha 30 de junio de 2015.
- 137.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2015.
- 138.- Decreto N° 1.658 de fecha 30 de diciembre de 2016
- 139.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2016.
- 140.- Decreto N° 1.439 de fecha 29 de diciembre de 2017
- 141.- Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de diciembre de 2017
- 142.- Decreto N° 1.211 de fecha 29 de julio de 2018
- 143.- Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de junio de 2018.
- 144.- Decreto N° 1.623 de fecha 31 de diciembre de 2018.
- 145.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018
- 146.- Decreto N° 1.966 de fecha 31 de diciembre de 2019
- 147.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019
- 148.- Decreto N° 864 de fecha 31 de diciembre de 2020
- 149.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020
- 150.- Decreto N° 7.970 de fecha 18 de noviembre de 2013
- 151.- Contrato de prestación de servicios de fecha 13 de noviembre de 2013
- 152.- Decreto N° 1.550 de fecha 13 de marzo de 2014
- 153.- Contrato de prestación de servicios de fecha 13 de noviembre de 2013
- 154.- Decreto N° 7.687 de fecha 21 de octubre de 2014
- 155.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de octubre de 2014
- 156.- Decreto N° 1.448 de fecha 31 de diciembre de 2014
- 157.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2014



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

- 158.- Decreto N° 1.054 de fecha 30 de junio de 2015
- 159.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2015
- 160.- Decreto N° 1.410 de fecha 31 de diciembre de 2015
- 161.- Decreto N° 1.445 de fecha 31 de diciembre de 2015
- 162.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2015
- 163.- Decreto N° 1.632 de fecha 30 de diciembre de 2016
- 164.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2016
- 165.- Decreto N° 1.607 de fecha 30 de diciembre de 2016
- 166.- Decreto N° 2.644 de fecha 18 de abril de 2017
- 167.- Modificación contrato a honorarios de fecha 18 de abril de 2017
- 168.- Decreto N° 1.394 de fecha 29 de diciembre de 2017
- 169.- Decreto N° 1.417 de fecha 29 de diciembre de 2017
- 170.- Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de diciembre de 2017
- 171.- Decreto N° 1.569 de fecha 31 de diciembre de 2018
- 172.- Decreto N° 1.598 de fecha 31 de diciembre de 2018
- 173.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018
- 174.- Decreto N° 1.913 de fecha 31 de diciembre de 2019
- 175.- Decreto N° 1.945 de fecha 31 de diciembre de 2019
- 176.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019
- 177.- Decreto N° 819 de fecha 31 de diciembre de 2020
- 178.- Decreto N° 841 de fecha 31 de diciembre de 2020
- 179.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020
- 180.- Decreto N° 4.728 de fecha 04 de septiembre de 2009
- 181.- Contrato de prestación de servicios de fecha 04 de septiembre de 2009
- 182.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2012
- 183.- Modificación Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de octubre de 2013.
- 184.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2013
- 185.- Decreto N° 1.473 de fecha 31 de diciembre de 2014
- 186.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2014
- 187.- Decreto N° 1.063 de fecha 01 de julio de 2015
- 188.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2015
- 189.- Decreto N° 1.488 de fecha 31 de diciembre de 2015
- 190.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2015
- 191.- Decreto N° 1.665 de fecha 30 de diciembre de 2016



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

- 192.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2016
- 193.- Decreto N° 1.020 de fecha 30 de junio de 2017
- 194.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de junio de 2017
- 195.- Decreto N° 1454 de fecha 29 de diciembre de 2017
- 196.- Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de diciembre de 2017
- 197.- Decreto N° 8.268 de fecha 06 de agosto de 2018
- 198.- Contrato de prestación de servicios de fecha 06 de agosto de 2018
- 199.- Decreto N° 1.643 de fecha 31 de diciembre de 2018
- 200.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018
- 201.- Decreto N° 1.984 de fecha 31 de diciembre de 2019
- 202.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019
- 203.- Decreto N° 2749 de fecha 01 de abril de 2020
- 204.- Anexo y/o modificación contrato de prestación de servicios de fecha 01 de abril de 2020.
- 205.-Decreto N° 881 de fecha 31 de diciembre de 2020.
- 206.-Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020
- 207.- Decreto N° 5.319 de fecha 28 de mayo de 2019
- 208.- Contrato de prestación de servicios de fecha 28 de mayo de 2019
- 209.- Decreto N° 13.248 de fecha 12 de diciembre de 2019
- 210.- Contrato de prestación de servicios de fecha 12 de diciembre de 2019
- 211.- Decreto N° 3.088 de fecha 05 de mayo de 2020
- 212.- Contrato de prestación de servicios de fecha 05 de mayo de 2020
- 213.- Decreto N° 858 de fecha 31 de diciembre de 2020
- 214.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020
- 215.- Decreto N° 2.050 de fecha 07 de abril de 2021
- 216.- Contrato de prestación de servicios de 7 de abril de 2021.
- 217.- Decreto N° 1.541 de fecha 31 de diciembre de 2015
- 218.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2015
- 219.- Decreto N° 1.692 de fecha 30 de diciembre de 2016
- 220.- Contrato de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2016
- 221.- Decreto N°26 de fecha 29 de enero de 2018
- 222.- Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de diciembre de 2017
- 223.- Decreto N° 1.694 de fecha 31 de diciembre de 2018
- 224.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018
- 225.- Decreto N° 2009 de fecha 31 de diciembre de 2019



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

- 226.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019
- 227.- Decreto N° 911 de fecha 31 de diciembre de 2020
- 228.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020
- 229.- Decreto N° 2005 de fecha 31 de diciembre de 2019
- 230.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019
- 231.- Decreto N° 898 de fecha 31 de diciembre de 2020
- 232.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020
- 233.- Decreto N°1.074 de fecha 01 de febrero de 2018
- 234.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de febrero de 2018
- 235.- Decreto N° 241 de fecha 01 de marzo de 2018
- 236.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de marzo de 2018
- 237.- Decreto N°1.622 de fecha 31 de diciembre de 2018
- 238.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018
- 239.- Decreto N° 14.769 de fecha 31 de diciembre de 2018
- 240.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2018
- 241.- Decreto N° 1.965 de fecha 31 de diciembre de 2019
- 242.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019
- 243.- Decreto N° 1.265 de fecha 06 de febrero de 2020
- 244.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2019
- 245.- Decreto 1.256 de 6 de febrero de 2020.
- 246.- Decreto N°3.869 de fecha 09 de julio de 2020
- 247.- Contrato de prestación de servicios de fecha 26 de junio de 2020
- 248.- Decreto N° 7.039 de fecha 31 de diciembre de 2020
- 249.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020
- 250.- Decreto N° 862 de fecha 31 de diciembre de 2021 (debe decir 2020)
- 251.- Contrato de prestación de servicios de fecha 31 de diciembre de 2020
- 252.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2015
- 253.- Contrato de prestación de servicios de fecha 04 de enero de 2016
- 254.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2016
- 255.- Contrato de prestación de servicios de fecha 02 de enero de 2017
- 256.- Contrato de prestación de servicios de fecha 03 de julio de 2017
- 257.- Contrato de prestación de servicios de fecha 02 de enero de 2018
- 258.- Contrato de prestación de servicios de fecha 03 de julio de 2018
- 259.- Contrato de prestación de servicios de fecha 05 de noviembre de 2018.



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

- 260.- Contrato de prestación de servicios de fecha 02 de enero de 2019
- 261.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de febrero de 2019
- 262.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2019
- 263.- Contrato de prestación de servicios de fecha 02 de diciembre de 2020
- 264.- Contrato de prestación de servicios de fecha 04 de enero de 2020
- 265.- Contrato de prestación de servicios de fecha 27 de enero de 2020
- 266.- Contrato de prestación de servicios de fecha 03 de febrero de 2020
- 267.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de abril de 2020
- 268.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2020
- 269.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de marzo de 2021
- 270.- Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de julio de 2021
- 271.- Decreto N° 855 de fecha 01 de febrero de 2016
- 272.- Decreto N° 6.437 de fecha 28 de julio de 2016
- 273.- Decreto N° 5.397 de fecha 28 de julio de 2017
- 274.- Decreto N° 998 de fecha 29 de enero de 2018
- 275.- Decreto N° 8094 de fecha 02 de agosto de 2018
- 276.- Decreto N° 14.408 de fecha 21 de diciembre de 2018
- 277.- Decreto N° 993 de fecha 28 de enero de 2019
- 278.- Decreto N° 2983 de fecha 29 de marzo de 2019
- 279.- Decreto N° 7.950 de fecha 07 de agosto 2019
- 280.- Decreto N°13.089 de fecha 10 diciembre 2019
- 281.- Decreto N°906 de fecha 27 de enero de 2020
- 282.- Decreto N° 1093 de fecha 28 de febrero de 2020
- 283.- Decreto N° 3804 de fecha 03 de julio de 2020
- 284.- Decreto N°3000 de fecha 27 de abril de 2020
- 285.- Decreto N° 635 de fecha 03 de febrero de 2021
- 286.- Decreto N° 2117 de fecha 12 de abril de 2021
- 287.- Decreto N° 4.955 de fecha 11 de agosto de 2021

Testimonial:

Se escuchó en estrados la declaración de los siguientes testigos, quienes fueron examinados previo cumplimiento de la ritualidad establecida en el artículo 454 N° 5 del Código del Trabajo.

Alondra Macarena Jarpa Herrera, Geógrafa, cédula de identidad N°18.487.004-3, soltera, geógrafa, domiciliada en Arturo Prat N°801, Curanilahue. Conoce a los demandantes porque fueron



PODER JUDICIAL

prestadores de servicios para la Municipalidad, “fuimos colegas en el municipio. Actualmente se desempeña como Directora de Desarrollo Comunitario.

Ingresó a trabajar en la Municipalidad en julio de 2021, relacionándose con el Municipio por medio de contratos a honorario, tenía un “horario flexible y acudía a la Municipalidad de lunes a viernes entre las 08:30 y las 17:30 horas en base a las necesidades de la Administración, generalmente estaba en terreno, así funcionaba mi horario.” (SIC). Reconoce que avisaba a la Administración cuando “salía a terreno por una cuestión de organización”. (SIC).

Respecto de los demandantes, entiende que también tenían un horario flexible, y tenían que informar cuando salían a terreno.

“Nunca mencionaron la obligación de tener que usar una ropa específica, sí vi a colegas con un polar que tenía el escudo de la Municipalidad, pero ello no fue por una orden.” (SIC).

En su calidad actual, explica que cada programa debe cumplir con los objetivos específicos señalados en los Convenios, que además contienen los lineamientos técnicos como los profesionales que deben ser contratados, las evaluaciones, presupuesto y metas a cumplir.

Los convenios se suscriben directamente por la Municipalidad y las instituciones externas.

“Nosotros coordinamos con el encargado territorial, desarrollando las actividades, se les entrega un espacio dentro de la Municipalidad para prestación de servicios y también se les proporciona vehículo” (SIC).

“Hay un líder de equipo, -quien es el jefe directo de los profesionales que se desempeñan en el programa-, que es el encargado de rendir cuenta ante la Institución. La DIDECO, solo revisa las bases comunales, y su ejecución informando a la Institución si hay o no que modificar ciertos criterios o lineamientos, dependiendo las características de la comunidad local”. (SIC). Agrega que, en la elección de los funcionarios la institución externa participa, mas no así en su desvinculación.

Si los convenios no se ejecutan, no hay financiamiento para mantener el programa.

Respecto de los demandantes y su desvinculación expuso que “la nueva administración, trae nuevos lineamientos, y se les desvincula porque hay un cambio en la forma de hacer el trabajo y no resultó satisfactoria frente a la nueva forma de trabajar en la nueva administración”. (SIC).

Contrainterrogada, señala que se vinculó a la Municipalidad en el año 2021 como honorario, encargada de la oficina de campamentos. Reconoce que cuando ejercía esa función, representaba al municipio frente a la comunidad.

Aclara que el Convenio señalaba a quién contratar y la desvinculación la decidía la Municipalidad. “Las entrevistas se desarrollaron en conjunto, la no renovación fue una decisión de la Municipalidad en la que no participó ningún programa”. (SIC).

Declara que desconoce las razones de la desvinculación, reconoce que se trata de funcionarios contratados por más de dos años, de manera sucesiva y sin solución de continuidad.



PODER JUDICIAL

Gabriel Marcelo Rodríguez, cédula de identidad N°14.711.637-3. Divorciado, funcionaria municipal, domiciliado en Manuel Rodríguez N° 870, Curanilahue. Declara que conoce a las partes del juicio, la Municipalidad y ex funcionarios a honorarios.

Señala que los funcionarios a honorarios cumplen la misma jornada de trabajo que “el resto de los funcionarios, el mismo horario” (SIC), agrega, “siempre que sean requeridos sus servicios por contrato” (SIC), “puede ser fuera de horario, sábados y domingos”.

Reconoce que tanto a él como a los demandantes se les entregó una chaqueta con el logo de la Municipalidad, que era usada por todos “yo tenía que usar esa ropa siempre”. (SIC).

Desde el mes de julio de 2021, se mantuvo esa obligación, no hubo cambio de instrucciones en cuanto al uso de vestimentas.

Reconoce que su contrato es a honorario, y en ese sentido “siempre a final de año uno espera la renovación para el año siguiente” (SIC).

Contrainterrogado, señala que los demandantes dependían directamente de DIDECO, y no podían faltar o ausentarse de la jornada laboral sin pedirle autorización a la Directora, “por lo menos a los contratos a honorarios nos dan seis días al año” (SIC).

Finalmente señala que los contratos a honorarios se renuevan cada seis meses o anualmente.

David Cristian Nova Chávez, cédula de identidad N°12.627.451-3, divorciado, funcionario público, domiciliado en Población Eleuterio Ramírez, Pasaje 19 N°38, Curanilahue. Señala que “conoce a las partes de este juicio, por cuanto los demandantes son personas cuyos contratos de prestación de servicios no se les renovó. Desde octubre del año 2021 hasta mayo del año 2022 se desempeñó en la función de administrador municipal. Desde junio del año 2022 no desempeña funciones en la Municipalidad de Curanilahue. Respecto a su calidad de administrador, ¿sabe usted porque los demandantes fueron desvinculados o no renovados sus contratos de prestación de servicios? Sí, las jefaturas informaron, en base al proceso anual de revisión de contratos la no necesidad de contar con sus servicios, principalmente por un mal desempeño o desempeño deficiente de las labores que realizaban, eso principalmente.

¿Usted recibió esa información de las jefaturas? Sí, tomé conocimiento de la información de las jefaturas. Respecto de los demandantes, ¿sabe usted qué tipo de contratos tienen? De prestación de servicios. Los prestadores de servicios ¿en qué horario concurren a la Municipalidad? Ellos no deben ir en un horario establecido a la Municipalidad, y tampoco se les exige marcaje. Ellos están contratados para desarrollar un servicio determinado en la Municipalidad, el cual evidentemente les permite o exige asistir en un horario hábil, porque las coordinaciones que ellos hacen lo deben efectuar con funcionarios que están contratados en el establecimiento, de 8:00 a 17:30, que es el horario de funcionamiento de la Municipalidad. Pero no tienen una exigibilidad de asistencia diaria.



PODER JUDICIAL

¿Con que vestuario concurren los funcionarios a la Municipalidad? No se exige la presentación con un tipo de uniforme de los funcionarios a la Municipalidad. ¿Tuvo contacto personal con algunos de los demandantes que se encuentran en cámara hoy día? Con el señor Ferreira, recuerda haber estado y no recuerda que haya tenido uniforme las veces que lo vio.

¿Sabe usted cómo se generaron las no renovaciones de contratos de los demandantes? Sí, en el mes de noviembre en general se hace la revisión de los contratos en general para poder determinar la renovación o no, en este caso la alcaldesa le pidió a los directores de cada área que revisaran las situación de las renovaciones tanto de los funcionarios que son los contrata, y de las personas contratadas como honorarios en la cuenta 2103, o de prestación de servicios en la cuenta 2104. Los directores previa evaluación, informaban el desistimiento de los servicios de las personas para el 2022.

¿Nos puede aclarar que se refiere con las cuentas 2103 y 2104? Sí, son las cuentas de imputación contable del presupuesto municipal. La 2103, corresponde a los contratos a honorarios y la cuenta 2104 corresponde a la de prestaciones de servicios.

Usted como administrador municipal, ¿sabe cómo se financian los sueldos de los trabajadores a honorarios o los prestadores de servicios en la Municipalidad? Cuando son honorarios propios son con financiamiento municipal, Cuando son prestaciones de servicios, hay que diferenciar entre los que se financian con parte de la municipalidad y aquellos que se financian mediante programas que son fondos de terceros que se reciben en la institución, y cuyos fondos se destinan al pago prestadores que están establecidos en los convenios que contrae cada servicio público. ¿Cómo se vincula la Municipalidad con estas instituciones externas? Cuando hay una relación que hay materializar en algún tipo de prestación de servicio, se suscribe un convenio, el cual obliga a la municipalidad a cumplir ciertas metas, números de atenciones, actividades realizadas. Los fondos que entrega esa institución son para el cumplimiento de sus fines, es decir las personas que están contratadas son exclusivamente para los fines que el mandante le señala a la Municipalidad, que se cumplan en base a los fines que suscribió.

¿Quién elabora estos convenios? En general se elaboran por las instituciones externas, la Municipalidad puede tomar conocimiento de aquello y dejar observación que rara vez pueden ser modificados, ya que son a nivel nacional, y se suscribe por el alcalde o alcaldesa. ¿La institución externa contacta a la Municipalidad o la Municipalidad contacta a la institución externa? En general es la institución quien se acerca la Municipalidad para establecer los convenios.

Contrainterrogatorio: ¿Sabe usted si todos ellos recibieron un sueldo o una remuneración por sus servicios? Una persona que presta servicios no recibe un sueldo, sino que un pago por la prestación, lo que no corresponde a un sueldo ni a una remuneración.



PODER JUDICIAL

¿Usted dijo que ellos cumplían horario desde las 08:00 a las 17:30 horas? Usted me escucho mal, yo dije que el horario en el que ellos prestan servicios, ellos tienen que concurrir en los horarios de funcionamiento en que se encuentran los funcionarios de la Municipalidad. Ellos no cumplían horario.

¿Sabe usted si los servicios que prestaba a la Municipalidad mediante los programas a que se refiere o que refirió en esta causa, eran de carácter permanente y con fondos propios de la Municipalidad? Los programas se fijan a través de convenios, y los convenios son anuales, es decir de un año calendario a otro. Generalmente se renuevan, pero quien manda decide o no la renovación. ¿Durante cuánto tiempo se renovaron los programas de los demandantes, lo sabe? No, lo desconozco, yo llegué en octubre del año 2021 y estuve hasta mayo del año 2022.” (SIC).

Confesional:

Jennifer Elisa Jara Carrasco. ¿Usted en que calidad trabajó para la Municipalidad de Curanilahue? Honorario. ¿Desde qué año? Desde al año 2018. ¿Usted tuvo un solo contrato o varios contratos? Dos contratos. ¿Estos contratos desde el 2018 hasta que año duró? Hasta diciembre de año 2021. ¿O sea, tuvo un contrato con la Municipalidad? Los dos contratos municipales, pero uno me pagaba mitad una institución. ¿Qué institución? Senda. ¿En qué consistían sus funciones? Apoyo profesional. ¿Podría describirlo? Sí, era la encargada del área de educación del senda y yo me contactaba con todos los establecimientos educacionales, junta de vecinos, haciendo capacitaciones, talleres, acerca de prevención sobre el consumo de drogas.

¿En este programa usted tenía un jefe directo? Dideco. ¿No había un jefe directo? Sí, había era Alejandra Muñoz, pero Dideco era la jefatura directa. ¿De quién recibía directamente las instrucciones de Alejandra Muñoz o de Dideco? Dideco. No podíamos hacer ninguna actividad sin que pasara por Dideco.

Agrega que, “de la administración poco puedo hablar, se presentaron, fueron despectivos, DIDECO nos había felicitado en la última reunión, y aquí nada” (SIC).

Expone que la Alcaldesa, nunca la quiso recibir, se refería a nosotros diciendo “que ella no se iba a dirigir a nosotros, eso en noviembre, nosotros le pedimos una firma para comprar, y dijo que no le interesaba firmar.” (SIC).

“Ella nunca nos quiso recibir, no nos dejaba trabajar, prohibía hacer compras para la ejecución de proyectos, DIDECO se negó a firmar, y antes de noviembre de 2021, nunca se había opuesto a una orden de compra”. (SIC).

Sergio Orlando Gajardo Lagos. Declara que trabaja desde inicios del año 2018 por medio de un contrato con la Junta de vecinos y en mayo de 2019 y hasta diciembre de 2021, se desempeñó con un contrato con la Municipalidad. Era coordinador de los proyectos FNDR, y el contrato estaba directamente relacionado con la ejecución de ese proyecto.



PODER JUDICIAL

Los contratos eran ejecutados en las dependencias del Municipio y desde el Gobierno Regional recibía las instrucciones.

Trabajó desde el 2019 como coordinador, pero también se desempeñaba en varios departamentos, y la última etapa fue en SERNAMEG.

Dentro de sus funciones estaba “ayudar en la postulación de los programas recibiendo instrucciones directamente del Municipio y otras directas del convenio SERNAMEG, haciéndose reuniones de coordinación con DIDECO”. (SIC).

Respecto de SERNAMEG, declara que “quien se vinculaba directamente era la encargada pero mi jefe directo era la DIDECO”. (SIC).

Luis Alberto Ferreira Garrido. Declara que, se desempeñó para la Municipalidad desde el año 2013 a 2021, primero para el Programa de Vivienda dependiente de DIDECO, y después para el Programa de Mejoramiento Urbano, dependiente de la Administración Municipal. Primero bajo un contrato a honorario y después parte honorario parte funcionario de planta, cumpliendo diversas funciones desde el 2013 y durante todos esos años hasta el 2021. Trabajó por medio de contratos anuales, renovados año a año.

Los proyectos eran elaborados por la DIDECO, y le correspondía ejecutarlos. Tenía una oficina y estaba a cargo de más de 700 personas, con mucha responsabilidad administrativa, debiendo cumplir horario desde las 08:30 a las 17:30 horas.

Finalmente, declara nunca haber sido investigado, trabajando seis años seguido, incluso presencialmente durante la pandemia.

Claudia Maritza Rojas Ayala. Declara que trabajó para la Municipalidad durante ocho años como encargada de la Oficina de Adulto Mayor, a honorario, dependiente de la DIDECO como jefe directo. Detalla dentro de sus funciones específicas la de acompañar a los adultos mayores y asociaciones de adultos mayores, y todos los lineamientos era consentidos por la DIDECO.

Mis contratos dicen que son a honorarios, en los que se señalaba la obligación de cumplir sus funciones en la Municipalidad, el contrato de 2021 no lo señalaba.

Agrega que solo llegó atrasada en tres oportunidades, siempre informándolo. Expone que para la antigua administración, el cumplimiento del horario y el trabajo era un compromiso que partía en el alcalde quien “entendía que llegar a las 07:55 era llegar atrasado”. (SIC)

Se le pregunta por las vulneraciones expuestas en la demanda, señalando la absolvente que “éramos los fachos pobres, estábamos en la lista negra donde se consignaba <la basura que había que sacar>. Los colegas lo escucharon directamente de la Administración.” Puntualiza indicando “en una reunión entre la alcaldesa, DIDECO y concejales en los que se cuestiona la confianza que se tenía hacia a mí” (SIC), la reunión había sido organizada por la absolvente-actora de autos, “la Alcaldesa señaló que contaban con su confianza la DIDECO” (SIC) a quien individualiza por su nombre y estando presente “no fui nombrada frente a



PODER JUDICIAL

los adultos mayores para quienes trabajaba” (SIC). “Los viudos de Gengnagel” (SIC) no tenían cabida en la nueva administración, agrega que esa reunión organizada por ella, fue objeto de publicidad, agregando “yo la organicé, no fui mencionada y en la fotografías solo salen mis manos”. (SIC).

La Srta. DIDECO parecía ser la única que entendía las propuestas que se presentaban para la autorización de la Alcaldesa, “la Srta. Alondra nos apoyaba al principio”. (SIC). Después parece que “no quería trabajar”. (SIC).

“Presenté varios convenios que no fueron aprobados, ni siquiera fue evaluado. Actualmente sigo trabajando aunque no contratada, porque la persona que llegó es de Penco y no conoce las necesidades ni la realidad de los adultos mayores” (SIC).

Finalmente señala que no se acogió a la modalidad de teletrabajo cumpliendo el presupuesto de ser mayor de 60 años, se enfermó dos veces de COVID-19, nunca abandonó su proyecto.

III.- De la excepción de Incompetencia Absoluta del Tribunal:

SEXTO: Que el artículo primero del Código del Trabajo dispone, en su inciso primero, su aplicación general a las “*relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores*”. Las relaciones laborales han sido caracterizadas, para distinguirlas del arrendamiento de servicios regulado por el Código Civil, como aquellas en que se prestan servicios personales bajo subordinación y dependencia a cambio de una remuneración. El inciso segundo del citado artículo exceptúa de esta aplicación “*a los funcionarios de la Administración del Estado... siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial*”. En el caso de los funcionarios municipales, corresponde al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, aprobado por la Ley 18.883. El artículo primero de este cuerpo legal dispone su aplicación “al personal nombrado en un cargo de las plantas”. También se aplica a los “*funcionarios a contrata... en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de estos cargos*”. Las personas contratadas por una municipalidad para prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia, a cambio de una remuneración, y que no hayan sido nombradas en un cargo de planta ni estén a contrata, se encuentran en consecuencia amparadas por el Código del Trabajo, según lo dispuesto en el primer inciso de su artículo primero.

Que, artículo 4° de la Ley N°18.834, establece la posibilidad de contratación a honorarios como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración Pública puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. De este modo, corresponde a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto excedan o simplemente no coincidan con los términos que dispone la normativa en comento, sino que revelan caracteres propios del vínculo laboral que



PODER JUDICIAL

regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo 4° señalado.

SÉPTIMO: Que, encontrándose discutida la naturaleza de los servicios prestados por la actora en cuanto a si reúnen los presupuestos del artículo 4° de la Ley 18.883 o si esta relación contractual se desarrolló bajo vínculo de subordinación y dependencia en los términos de los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo, conforme lo dispone el artículo 420 del citado código, corresponde rechazar la excepción de incompetencia como se dirá en lo resolutive de esta sentencia.

IV.- De la excepción de falta de legitimación pasiva:

OCTAVO: Que, se ha opuesto excepción de falta de legitimación pasiva, respecto de Katherine Yael Vallejos Navarrete, Alejandra del Pilar Muñoz Salazar y doña Jennifer Elisa Jara Carrasco, quienes en la teoría de la demandada prestaban servicios para el programa SENDA, don Sergio Orlando Gajardo Lagos, quien en la teoría de la demandada prestaba servicios para el programa SernamEg y, doña Fabiola Soledad Esperguel Silva, quien en la teoría de la demandada prestaba servicios para el programa FOSIS.

NOVENO: Que, la denunciada a fin de acreditar su excepción o defensa, no incorpora los Convenios en virtud de los cuales fundamenta la falta de legitimación pasiva, ello por cuanto no fueron digitalizados con a lo menos tres días de antelación a la audiencia de juicio, haciéndose efectivo el apercibimiento del artículo 6° de la Ley 20.886 al inicio de la audiencia de juicio.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio es posible señalar que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en adelante también “SENDA”, es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias sicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Le corresponde también la elaboración de una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.

En cumplimiento de dicho objeto, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, letra j), de la Ley N° 20.502, corresponde al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las Municipalidades, que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

En el ámbito de su competencia, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, busca impulsar y apoyar técnica y financieramente, programas, proyectos y actividades destinados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, así como a la recuperación de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.



PODER JUDICIAL

Los lineamientos del Servicio en materia de drogas y alcohol tienen su fundamento en principios como la salud pública integral, la seguridad pública, la territorialidad, la corresponsabilidad, la intersectorialidad y la complementariedad, buscando materializar cuatro ejes principales, estos son, la protección, promoción, prevención y recuperación del consumo de alcohol y drogas. En este contexto, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, está formulando nuevas estrategias de perspectiva territorial y comunitaria en base a los conocimientos de los distintos determinantes sociales que afectan el desarrollo de las personas y su calidad de vida.

En relación con los objetivos antes planteados, SENDA dispone de los programas SENDA Previene en la Comunidad; Prevención Selectiva e Indicada “Actuar a Tiempo”; y Prevención Ambiental, Universal y Selectiva “Parentalidad”, los cuales son implementados y desarrollados en diversas comunas, a través de convenios de colaboración técnica y financiera entre las Direcciones Regionales de SENDA y las respectivas Municipalidades, bajo la supervisión de la Dirección Nacional del Servicio.

UNDÉCIMO: Que, en lo que respecta al presente juicio es un hecho que ha quedado establecido que los actores Katherine Yael Vallejos Navarrete, Alejandra del Pilar Muñoz Salazar y doña Jennifer Elisa Jara Carrasco, se desempeñaron en la Municipalidad demandada, en el contexto de la ejecución de un Convenio celebrado entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y la demandada. Este es un hecho no controvertido de acuerdo al examen de los escritos de demanda y contestación.

Quedó establecido por medio de la declaración de los testigos examinados en juicio, que los contratos en virtud de los cuales se vinculan los actores fueron suscritos por éstos con la Municipalidad, sin embargo su remuneración u honorario era pagado por medio del financiamiento entregado por SENDA.

Los testigos examinados, también son contestes en indicar que todos los integrantes de SENDA, fueron desvinculados en general.

Por otro lado, y sin que exista prueba en contrario, - por cuanto no se incorporaron los referidos convenios-, los testigos declaran que el financiamiento era indispensable para mantener los programas, pues de lo contrario se requiere de una evaluación presupuestaria para determinar si existen fondos para poder ejecutarlo.

Agregan que, los lineamientos técnicos determinaban las personas que serían contratadas por la Municipalidad, participando del proceso de selección.

Los testigos de ambas partes, son contestes en indicar que la autoridad encargada de coordinar con SENDA era la Directora de Desarrollo Comunitario. La respectiva Directora era quien se relacionaba con los actores, servía de conducto regular para la presentación de los diversos proyectos, compras y todo lo relacionado con la ejecución del Programa, ante el Alcalde, quien autorizaba los fondos o proyectos.



PODER JUDICIAL

DÉCIMO TERCERO: Que el artículo 7° del Código del Trabajo dispone que *“Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”*.

Que, doctrinariamente, se ha considerado que la subordinación y dependencia es un elemento esencial o tipificante de un contrato de trabajo, la que implica la vinculación de dos sujetos desde posiciones diversas ya que, por un lado, se tiene a un sujeto que requiere una prestación de servicios para lo cual ejerce un poder de mando que se manifiesta en su poder de dirección y de disciplina y, por otro lado, un sujeto que debe cumplir las instrucciones u órdenes que el primero le imparta para la ejecución de las labores encomendadas, dentro de los márgenes y límites que el propio legislador ha impuesto y por las cuales percibe una remuneración.

DÉCIMO CUARTO: Que, por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 18.883, dispone que el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las municipalidades y en el caso de los funcionarios a contrata estar afectos a dicha ley, en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de dichos cargos.

Que, a su vez, el artículo 4 de la ley N° 18.883, dispone y faculta a las municipalidades la contratación sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, mediante decreto del alcalde. Por su parte, el inciso segundo de la norma antes señalada autoriza la contratación a honorarios para la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. En ambas situaciones, dichas personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato, no siéndoles aplicables las normas del referido estatuto de funcionarios municipales.

DÉCIMO QUINTO: Que es un hecho público y notorio que, a través de los años, ha sido una preocupación constante del gobierno central la elaboración de políticas destinadas a la prevención del consumo de drogas y alcohol, es así, que inicialmente estuvo a cargo de ellas el Consejo Nacional para el Control de Estupefacentes, CONACE, órgano que implementó una serie de estrategias a nivel comunal. Posteriormente, por Ley N°20.502, publicada con fecha 21 de febrero de 2011, se crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, como se consigna en el considerando décimo.

Que, es un hecho público que los Convenios se celebran entre SENDA y la Municipalidad para dar cumplimiento a un objetivo del Servicio, objetivo que dice relación con la existencia de colaboración técnica y financiera entre las Direcciones Regionales de SENDA y las respectivas Municipalidades, bajo la supervisión de la Dirección Nacional del Servicio. Es decir, nos encontramos con una relación contractual de naturaleza



PODER JUDICIAL

civil o regulada por el derecho público que involucra a un tercero, que a través del convenio establece los lineamientos técnicos que ha de ejecutarse dentro del año calendario que dura el convenio.

DÉCIMO SEXTO: Que, conforme se viene razonando, no cabe sino concluir que los demandantes fueron contratados por la Municipalidad de Curanilahue en el ámbito de las facultades que le confiere al ente edilicio el artículo 4° de la ley 18.883, toda vez que, conforme se ha señalado, desempeñaron determinados cometidos, de carácter transitorio y que dicen relación con programas desarrollados en beneficio de la comunidad, que por lo demás constituyen un objetivo propio de otra entidad pública y que no dicen relación con aquellas tareas que son propias del quehacer municipal, esto es, de aquellas a que éstas se encuentran obligadas a cumplir en virtud de un mandato legal. Razonamiento que lleva a acoger la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por la denunciada respecto de la demanda incoada por Katherine Yael Vallejos Navarrete, Alejandra del Pilar Muñoz Salazar y doña Jennifer Elisa Jara Carrasco.

DÉCIMO SEXTO: Que, lo declarado por los testigos en cuanto al cumplimiento de un horario y deber de asistencia, el horario que ellos cumplían dice relación con la atención de público, y que circunscribe al horario que la entidad edilicia mantiene sus puertas abiertas al público, mas por sí solo no configura vínculo de subordinación y dependencia.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que corresponde analizar la excepción en relación al demandante Sergio Orlando Gajardo Lagos y doña Fabiola Soledad Esperguel Silva. Respecto del primero se establece que se desempeñó en el programa social “Jefa de Hogar”, por medio de una alianza entre el Municipio y SernamEG.

Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, tiene como funciones el implementar políticas, planes y programas con pertinencia cultural, orientados a la equidad de género, a la igualdad de derechos y a procurar eliminar toda forma de discriminación arbitraria contra las mujeres, incluido el Plan Nacional de Igualdad entre hombres y mujeres.

Que, conforme lo declara el propio actor, en la prueba confesional, sus funciones estaban circunscritas al Programa, incluso la “ayuda para postular a los beneficios”, y que dicen relación con el objetivo del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

Que aún en el evento que los servicios ejecutados por el actor se hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario. Se ha acreditado que la Municipalidad no era libre para contratar a quién ella quisiera, pues debía cumplir los perfiles definidos en los convenios celebrados.

Por otro lado, el absolvente refiere haber efectuado otras funciones ajenas al programa, sin embargo, fuera de lo declarado, no existe prueba que permita a lo menos presumir cuáles serían esas otras funciones. Razón por la que se acogerá la excepción opuesta por la demandada a su respecto.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en el caso de la demandante Fabiola Soledad Esperguel Silva.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) tiene como objetivo principal financiar proyectos destinados a beneficiar a los grupos más pobres de nuestra sociedad.



PODER JUDICIAL

Por su parte, los Proyectos Sociales (FOSIS), tienen la finalidad de ejecutar programas que son financiados por FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social (MINDESOC), destinados a familias participantes del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario.

DÉCIMO NOVENO: Que, no obstante haber cumplido horario y deber de asistencia, esos elementos no son suficientes para acreditar la subordinación y dependencia, máxime si el honorario era pagado a través del respectivo Convenio.

Por otro en estos casos, la función de la Directora de Desarrollo Comunitario es de coordinar con la Dirección del Servicio por cuanto se deben cumplir los objetivos propios del Convenio, y en ese sentido debía aprobar los proyectos que se presentaban a la firma del Alcalde, pudiendo presumir que este hecho se origina en la necesidad de poder reclamar administrativamente la responsabilidad de los involucrados, y, atendida la naturaleza a honorario, no era viable que existiera un jefe de programa que pudiera ejercer estas funciones, pues carece de responsabilidad administrativa.

Motivaciones precedentes que llevan a concluir que en el caso de la demandante, tampoco concurren los elementos de los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, sino que se trata de un contrato suscrito en los términos del artículo 4° de la Ley 18.883.

V.- En cuanto al Fondo:

VIGÉSIMO: Respecto de don Pablo Eduardo Basoalto Rojas, del mérito de la prueba incorporada valorada conforme a las reglas de la sana crítica, se han establecido los siguientes hechos:

1.- Que, se vinculó con la demandada desde julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. Así se acredita por medio (A folio 58): Decreto N° 2005 de fecha 31 de diciembre de 2019, y su contrato de prestación de servicios de 31 de diciembre de 2019 contratado según lo dispuesto el artículo 4° de la Ley 18.883, para cumplir funciones como apoyo del Polideportivo, Decreto N° 898 de 31 de diciembre de 2020, y su contrato de prestación de servicios de 31 de diciembre de 2020, como apoyo a organizaciones deportivas e Instituciones. La boleta electrónica de honorarios de fecha noviembre de 2021 a nombre de Pablo Basoalto (a Folio 24) solo acredita que desempeñó un servicio accidental y específico durante el mes de noviembre de 2021. Por otro lado, el documento Previred (a Folio 70); solo acredita que el demandante no se encuentra vinculado como trabajador dependiente.

2.- Conforme a lo declarado de manera conteste, por los testigos, la obligación de registrar asistencia estuvo vigente desde el año 2012 hasta el 2017, por lo que con posterioridad el control del cumplimiento del horario o asistencia estaba a cargo del Director de Desarrollo Comunitario, conforme se lee de sus contratos, ya que dependía de esta dirección.

3.- Que, fuera de las funciones específicas detallada en cada uno de sus contratos, no es posible arribar a la conclusión que la prestación de sus servicios no se enmarque en la excepción del artículo 4° de la Ley 18.883, encontrándonos frente a un profesional contratado para funciones específicas, de apoyo en



PODER JUDICIAL

polideportivo en el año 2019 y de apoyo organizaciones deportivas e Instituciones en el año 2020. Máxime si solo se acompaña una única boleta a honorarios que da cuenta de la prestación de un nuevo contenido específico, D. Alcaldicio 898 de 31 de diciembre de 2020 como encargado de la sala de musculación, período noviembre. Por otro lado, se trata de labores accidentales que no son las habituales de la municipalidad; como ente al servicio de la comunidad, y está inserto en un período en que su contrato dice relación con apoyo a organizaciones deportivas e instituciones.

4.- Que, el hecho de existir declaraciones de testigos que refieren en términos amplios y generales al cumplimiento de un horario y asistencia, o de recibir instrucciones de parte de la jefatura directa; éstas deben tener conexión con la prueba incorporada en el juicio, por cuanto las conclusiones a las que han de arribarse deben tener una congruencia a fin de no contradecir los principios de la lógica. Arribándose a la conclusión que se rechazará la demanda a su respecto por no haberse acreditado la relación de subordinación y dependencia en los términos de los artículo 7 y 8 del Código del Trabajo.

VIGÉSIMO PRIMERO: En cuanto a la actora Claudia Maritza Arévalo Toloza, por medio de la prueba incorporada en juicio, valorada al mérito de la sana crítica, se ha logrado establecer:

1.- Que, desempeñó labores desde noviembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2021. Así lo acreditan los Decretos de Nombramiento (N°4.758; 1.473; 1.488; 1.665; 1.020; 1.454; 8.268; 1.643; 1.984; 2.749 y 881); y los respectivos contratos de prestación de servicios, que se celebraron de manera sucesiva, continua y de manera ininterrumpida.

2.- Que, conforme a los contratos referidos se le reconoce derecho a la devolución de gastos fuera de la comuna y sector rural –gastos de locomoción y alimentación–; derecho a seis días de permisos aun cuando se diga en el contrato “autorización de no desempeño de funciones” (SIC); vestimenta; feriado legal; derecho a presentar licencia médica hasta 30 días; derecho a pre y post natal.

Sobre este punto, los testigos de una y otra parte, son contestes en que se les entregó un polar o chaqueta con el escudo distintivo de la I. Municipalidad demandada, por medio del cual, se les reconocía como funcionario del ente edilicio sin distinción, por otra parte, las testigos de la demandante estaban contestes en el deber de asistencia y cumplimiento de horario, propia de los funcionarios de planta. A mayor abundamiento el contrato de 04 de septiembre de 2009 establece obligación de cumplir 44 horas semanales y la obligación de marcar asistencia en reloj control, siendo un hecho reconocido por la representante legal de la demandada, que en la anterior administración existía esta obligación.

3.- Que, conforme a los contratos se acredita que las funciones se realizaban de manera dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Además, se rendía cuenta de las funciones a esta dirección por medio de reuniones semanales, informes mensuales.



PODER JUDICIAL

4.- Que, la renovación sucesiva de su contrato desde el año 2007 al 2021 da cuenta que las funciones que desempeñaba no pueden ser calificadas de accidentales, al mérito de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.883.

5.- Que, su última remuneración ascendía a \$999.731.- Según lo establecido en la cláusula sexta del contrato vigente al 31 de diciembre de 2021.

VIGÉSIMO SEGUNDO: En cuanto a la demandante **Sara Magdalena Reyes Ulloa**, por medio de la prueba incorporada, valorada al tenor de la sana crítica, se han establecido los siguientes hechos:

1.- Que, se desempeñó para la demandada desde el 01 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2021. Según dan cuenta los contratos suscritos de manera sucesiva e ininterrumpidamente en el período consignado; y Decretos Alcaldicios N° 855; 6.437; 5.397; 998; 8.094; 14.408; 933; 2.983; 7.950; 13.089; 906; 1.893; 3.804; 3.000; 635; 2.117 y 4.955.

2.-Que, conforme a los contratos referidos se le reconoce derecho a la devolución de gastos fuera de la comuna y sector rural –gastos de locomoción y alimentación-; derecho a seis días de permisos aun cuando se diga en el contrato “autorización de no desempeño de funciones” (SIC); vestimenta; feriado legal; derecho a presentar licencia médica hasta 30 días; derecho a pre y post natal. Se consigna un horario, que en caso de incumplimiento sería objeto de descuento, lo que implica la obligación de asistencia y cumplimiento de un horario –que es ajena a la prestación de servicios bajo modalidad a honorarios- se obliga a cumplir instrucciones que a su respecto sean impartidas, hecho que es congruente con lo declarado por las testigos; a contar del año 2018 se establece la obligación de asistencia en la jornada de funcionamiento del municipio – que aunque se utiliza una fórmula general- es propia de un contrato regido por el Código del Trabajo.

3.- Que, la renovación sucesiva de su contrato desde el año 2015 al 31 de diciembre de 2021, da cuenta que las funciones que desempeñaba no pueden ser calificadas de accidentales, al mérito de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.883.

4.- Que, su última remuneración ascendía a la suma de \$496.137, de acuerdo al contrato vigente al término de la relación contractual, según se lee del contrato de 01 de julio de 2021.

VIGÉSIMO TERCERO: Respecto de la demandante **Claudia Maritza Rojas Ayala**, por medio de la prueba incorporada valorada conforme a la sana crítica es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que, se relacionó con la demandada por medio de contratos sucesivos y sin solución de continuidad desde el 31 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2021. Conforme se extrae de los contratos incorporados y los decretos alcaldicios respectivos N°1.464; 1.480; 1059; 1.658; 1.439; 1.211; 1.623; 1.966 y 864.

2.- Que, dependía directamente de la Directora de Desarrollo Comunitario, así está consignado en los contratos, y dicha consignación es coherente con lo declarado en juicio por los testigos de la demandante,



PODER JUDICIAL

y los dichos de la testigo Alondra Jarpa Herrera. Por otro lado, la representante legal de la demandada, la menciona expresamente en la absolución, resultando acreditada la subordinación a la que estaba sometida en razón de su trabajo. Máxime si su relación laboral, dependía de la aprobación de la mencionada directora.

3.- Por otro lado, se le reconoce derecho a la devolución de gastos fuera de la comuna y sector rural –gastos de locomoción y alimentación-; derecho a días permisos aun cuando se diga en el contrato “autorización de no desempeño de funciones” (SIC); vestimenta; feriado legal; derecho a presentar licencia médica hasta 30 días; derecho a pre y post natal. Se consigna un horario, que en caso de incumplimiento sería objeto de descuento, lo que implica la obligación de asistencia y cumplimiento de un horario –que es ajena a la prestación de servicios bajo modalidad a honorarios- se obliga a cumplir instrucciones que a su respecto sean impartidas, hecho que es congruente con lo declarado por las testigos; y a contar del año 2018 se establece la obligación de asistencia en la jornada de funcionamiento del municipio –que aunque se utiliza una fórmula general- es propia de un contrato regido por el Código del Trabajo.

4.- Que, la renovación sucesiva de su contrato desde el año 2012 al 31 de diciembre de 2021, da cuenta que las funciones que desempeñaba no pueden ser calificadas de accidentales, al mérito de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.883.

5.- Que la última remuneración de la demandante ascendía a la suma de \$883.888.- conforme lo consigna el contrato de 31 de diciembre de 2020.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, respecto del actor **Javier Héctor Matamala Arias**, por medio de la prueba incorporada se han establecido los siguientes hechos:

1.- Que, se vinculó por medio de contratos anuales, sucesivos y de manera ininterrumpida desde el 01 de mayo de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2021. Así se ha establecido por medio de los Decretos Alcaldicios N° 2,958; 1.457; 800; 1.058; 1.231; 1.471; 6.294; 1.653; 4.836; 1.442; 1.626; 1.969 y; 867; y sus respectivos contratos.

2.- En los referidos contratos se le reconoce derecho a la devolución de gastos fuera de la comuna y sector rural –gastos de locomoción y alimentación-; derecho a días permisos aun cuando se diga en el contrato “autorización de no desempeño de funciones” (SIC); vestimenta; feriado legal; derecho a presentar licencia médica. Se consigna un horario, que en caso de incumplimiento sería objeto de descuento, lo que implica la obligación de asistencia y cumplimiento de un horario –que es ajena a la prestación de servicios bajo modalidad a honorarios- se obliga a cumplir instrucciones que a su respecto sean impartidas, hecho que es congruente con lo declarado por las testigos; y a contar del año 2018 se establece la obligación de asistencia en la jornada de funcionamiento del municipio –que aunque se utiliza una fórmula general- es propia de un contrato regido por el Código del Trabajo.

3.- Que, destaca dentro de sus funciones el desarrollo del turismo en la comuna, como una actividad económica destacada, función que corresponde a un fin propio de la Municipalidad y que por ese hecho no



PODER JUDICIAL

puede ser calificada de accidental en los términos del artículo 4° de la Ley 18.883; ello en conexión inmediata con el hecho de la renovación sucesiva de su contrato desde el año 2014 al 31 de diciembre de 2021, da cuenta que las funciones que desempeñaba no pueden ser calificadas de accidentales.

4.- Que, su última remuneración ascendía a la suma de \$869.837.- conforme se consigna en su contrato vigente al 31 de diciembre de 2021.

VIGÉSIMO QUINTO: En cuanto al actor **Albercio Bonifacio Aguayo Fernández**, se ha acreditado en base a las probanzas rendidas, valoradas conforme a la sana crítica, los siguientes hechos:

1.- Que, se vinculó con la Municipalidad demandada por medio de contratos sucesivos y sin solución de continuidad desde julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2021. Así se acredita por medio de los contratos incorporados y sus respectivos decretos alcaldicios. (1.541; 1.692; 26; 1.694; 2.009 y 911).

2.- Que, se le reconoce derecho a la devolución de gastos fuera de la comuna y sector rural –gastos de locomoción y alimentación-; derecho a días permisos aun cuando se diga en el contrato “autorización de no desempeño de funciones” (SIC); vestimenta; feriado legal; derecho a presentar licencia médica. Se consigna un horario, que en caso de incumplimiento sería objeto de descuento, lo que implica la obligación de asistencia y cumplimiento de un horario –que es ajena a la prestación de servicios bajo modalidad a honorarios- se obliga a cumplir instrucciones que a su respecto sean impartidas, hecho que es congruente con lo declarado por las testigos; y a contar del año 2018 se establece la obligación de asistencia en la jornada de funcionamiento del municipio –que aunque se utiliza una fórmula general- es propia de un contrato regido por el Código del Trabajo.

3.- Que, sus funciones dicen relación con el área de comunicación de la Municipalidad, constituyendo un deber para con la comunidad, y que ésta se mantenga informada de las acciones que los afectan y las actividades que realiza el ente edilicio, permiten concluir que sus funciones no pueden calificarse de accidentales como lo pretende la demanda, sino que se enmarcan en las funciones propias de la Municipalidad.

4.- Que, la renovación sucesiva de su contrato desde el año 2015 al 31 de diciembre de 2021, da cuenta que las funciones que desempeñaba no pueden ser calificadas de accidentales, al mérito de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.883.

5.- Que, su última remuneración ascendía a la suma de \$354.153.- según se consigna en su contrato al 31 de diciembre de 2021.

VIGÉSIMO SEXTO: En cuanto a la actora, **Ángela Belen Navarro Aguayo**, se ha acreditado por medio de la prueba producida, valorada conforme a la sana crítica lo siguiente:

1.- Que, se desempeñó para la demandada por medio de contratos sucesivos y sin solución de continuidad desde el 15 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021. Conclusión que se funda en los



PODER JUDICIAL

Decretos Alcaldicios N° 3.277; 1.444; 1.051; 1.462; 1.644; 1.019; 1.431; 8.269; 1.614; 1.959 y 854; así como de sus respectivos contratos.

2.- Que, se le reconoce derecho a la devolución de gastos fuera de la comuna y sector rural –gastos de locomoción y alimentación-; derecho a días permisos aun cuando se diga en el contrato “autorización de no desempeño de funciones” (SIC); vestimenta; feriado legal; derecho a presentar licencia médica. Se consigna un horario, que en caso de incumplimiento sería objeto de descuento, lo que implica la obligación de asistencia y cumplimiento de un horario –que es ajena a la prestación de servicios bajo modalidad a honorarios- se obliga a cumplir instrucciones que a su respecto sean impartidas, hecho que es congruente con lo declarado por las testigos; y a contar del año 2018 se establece la obligación de asistencia en la jornada de funcionamiento del municipio –que aunque se utiliza una fórmula general- es propia de un contrato regido por el Código del Trabajo.

3.-Que, la renovación sucesiva de su contrato desde el año 2013 al 31 de diciembre de 2021, da cuenta que las funciones que desempeñaba no pueden ser calificadas de accidentales, al mérito de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.883.

4.- Que, su última remuneración ascendía a la suma de \$834.547.- según su contrato vigente al tiempo del término del contrato.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, respecto del demandante **Luis Alberto Ferreira Garrido**, se ha acreditado por medio de la prueba incorporada lo siguiente:

1.- Que, el demandante prestó servicios continuos, anuales y sin solución de continuidad desde el 01 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Así se acredita por medio de los decretos alcaldicios y contratos incorporados. (D.A. N° 7970; 1550; 7687; 1448; 1054; 1410; 1445; 1632; 1607; 2644; 1394; 1417; 1569; 1598; 1913 y; 1945)

2.- Que, se le reconoce derecho a la devolución de gastos fuera de la comuna y sector rural –gastos de locomoción y alimentación-; derecho a días permisos aun cuando se diga en el contrato “autorización de no desempeño de funciones” (SIC); vestimenta; feriado legal; derecho a presentar licencia médica. Se consigna un horario, que en caso de incumplimiento sería objeto de descuento, lo que implica la obligación de asistencia y cumplimiento de un horario –que es ajena a la prestación de servicios bajo modalidad a honorarios- se obliga a cumplir instrucciones que a su respecto sean impartidas, hecho que es congruente con lo declarado por las testigos; y a contar del año 2018 se establece la obligación de asistencia en la jornada de funcionamiento del municipio –que aunque se utiliza una fórmula general- es propia de un contrato regido por el Código del Trabajo.

3.-Que, la renovación sucesiva de su contrato desde el año 2013 al 31 de diciembre de 2021, da cuenta que las funciones que desempeñaba no pueden ser calificadas de accidentales, al mérito de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.883.



PODER JUDICIAL

4.- Que, su última remuneración ascendía a la suma de \$750.319.- conforme al contrato vigente al 31 de diciembre de 2021.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, conforme se ha razonado en las consideraciones precedentes, y por aplicación del principio de la supremacía de la realidad los actores se encontraban unidos al municipio demandado por medio de contratos amparados por el derecho laboral, desarrollando las labores encomendadas de manera dependiente y por cuenta ajena, recibiendo mensualmente una retribución monetaria.

Que, como se ha establecido a su respecto las funciones para las que fueron contratados, constituyen ejecución de servicios habituales del Municipio demandado. Por otro lado la renovación sucesiva en el tiempo, hace caer la tesis de la demandada en cuanto a consistir en funciones determinadas, acreditando la naturaleza laboral de los vínculos con la demandada.

VI.- De la acción principal:

VIGÉSIMO NOVENO: Que, conforme lo mandata el legislador, los trabajadores demandantes debían acreditar indiciariamente los hechos constitutivos de la vulneración de garantías constitucionales que fueron vulneradas con ocasión del despido.

Que, de la prueba testimonial de la demandante, lo declarado por la actual Directora de Desarrollo Comunitario que declara que los actores fueron desvinculados “porque la nueva administración pide nuevos lineamientos... que su trabajo no satisface la nueva forma de trabajar” (SIC); la confesional de la demandada al interrogar a la demandante doña Claudia Rojas, según la cual los actores fueron llamados “los fachos pobres”; “los viudos de Gengnagel”; la existencia de una “lista negra” que contenía “la basura que había que sacar” (SIC); la negativa injustificada de la Alcaldesa a recibir en su oficio a los trabajadores denunciante, la no aprobación o retardo en los presupuestos y órdenes de compra; la declaración pública de quienes gozaban de su confianza –en presencia de algunos de los demandantes que no fueron mencionados- la segregación de la que da cuenta además lo declarado por Claudio Peñailillo Gutiérrez, y Luis Villalobos, quienes refieren a existir una buena opinión de su trabajo; la forma en que se habría iniciado una campaña de “terror”, por la existencia de una supuesta “lista negra”, que indicaría todos los funcionarios que serían desvinculados por su conexión con la anterior administración. El rumor que se generaba en cuanto a que dicha lista habría llegado directo a personal, -que da cuenta de un proceso que no fue puesto en conocimiento de los demandantes no obstante su vinculación extensa con la municipalidad- revela que el proceso estuvo opacado por falta de publicidad, que acrecentó la incertidumbre de este grupo de trabajadores.

TRIGÉSIMO: Que, la demandada a fin de acreditar la proporcionalidad, necesidad y racionalidad de la desvinculación, ha pretendido enmarcar el proceso de desvinculación en una simple “no renovación de los contratos de los demandantes”. Sin desmentir la existencia de una “lista negra”, que puede no existir



PODER JUDICIAL

materialmente, bastando para generar la alteración de la psiquis de los actores, la mera creencia de su existencia.

Que, por otro lado, la prueba incorporada por la demandada, se centró en desacreditar la concurrencia de los elementos de la subordinación y dependencia, sin embargo, superada la discusión a su respecto, correspondía algún medio de convicción destinado a sostener su tesis en cuanto a negar “toda discriminación política”, como lo consigna en su contestación.

De manera que, no superando la proporcionalidad de la medida, por cuanto no se ha dado razón alguna que sustente las razones para poner fin a contratos que datan de 2007, 2012; 2013; 2014 o 2016, y que en su momento fueron renovados, y por ende bien calificados; no compartiendo lo declarado por la testigo Jarpa, en cuanto a que con una nueva administración importa una nueva forma de trabajar, por cuanto ese es un concepto carente de base o sustento, al no acreditarse la existencia de malas calificaciones, mal desempeño, retardo u otra similar, hechos todos que generan sospechas fundadas de la vulneración alegada por los demandantes, concluyendo que sus desvinculaciones obedecieron a un acto de discriminación política, que concluye en su desvinculación.

VII.- Nulidad de despido:

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, encontrándose discutida la naturaleza laboral del vínculo, y encontrándose acreditada la laguna previsional de los actores, por medio de los certificados Previred, ya que al ampararse en la figura de los contratos a honorarios que están investidos del principio de legalidad, no resulta procedente la sanción contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, considerando además que las municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren de un pronunciamiento condenatorio.

VIII.- De la demanda subsidiaria:

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, habiéndose acogido la demanda principal, resulta inoficioso emitir un pronunciamiento respecto de la demanda subsidiaria.

IX.- De las costas:

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, no habiendo sido totalmente vencida no se condenará en costas a la demandada.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 2, 3, 7 y siguientes, 427 y siguientes, 446 y siguientes, 454, 455, 459 y siguientes, 485 y siguientes del Código del Trabajo, artículos 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, se declara:

I.- Que, se rechaza con costas, la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal promovida por la demandada I. Municipalidad de Curanilahue, en contra del libelo de folio 1.

II.- Que, se regulan las costas de la excepción en la suma de \$300.000.- (trescientos mil pesos).



PODER JUDICIAL

III.- Que, se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva, opuesta por la demandada en contra de Katherine Yael Vallejos Navarrete, Alejandra del Pilar Muñoz Salazar; doña Jennifer Elisa Jara Carrasco; don Sergio Orlando Gajardo Lagos; doña Fabiola Soledad Esperguet Silva ya individualizados, en consecuencia se rechaza la demanda principal y subsidiaria a su respecto.

IV.- Que no se condena en costas a los demandantes, por estimar que litigaron con motivo plausible.

V.- Que, los actores Claudia Maritza Arévalo Toloza; Sara Magdalena Reyes Ulloa; Claudia Maritza Rojas Ayala; Javier Héctor Matamala Arias; Albercio Bonifacio Aguayo Fernández; Ángela Belen Navarro Aguayo y Luis Alberto Ferreira Garrido y; la demandada I. Municipalidad de Curanilahue se relacionaron por medio de un vínculo de subordinación y dependencia, amparado por el derecho laboral.

VI.- Que, no habiéndose acreditado la relación laboral, se rechaza la demanda incoada en nombre y representación de don Pablo Eduardo Basalto Rojas, ya individualizado deducida en contra de la I. Municipalidad de Curanilahue.

VII.- Que, no se condena en costas al demandante Sr. Basalto Rojas, por estimar que litigó con motivo plausible.

VIII.- Que, se acoge la demanda por vulneración de derechos con ocasión del despido, deducido en representación de Claudia Maritza Arévalo Toloza; Sara Magdalena Reyes Ulloa; Claudia Maritza Rojas Ayala; Javier Héctor Matamala Arias; Albercio Bonifacio Aguayo Fernández; Ángela Belen Navarro Aguayo y Luis Alberto Ferreira Garrido en contra de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, todos ya individualizados, declarándose que el despido ha sido discriminatorio, condenando a la demandada al pago de las siguientes prestaciones e indemnizaciones:

1.- Claudia Maritza Arévalo Toloza:

- a) \$999.731.- por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$10.997.041.- por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los más de 11 años trabajados.
- c) \$5.498.520 por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) \$999.731.- por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021.
- e) \$7.977.848.- por concepto de indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo equivalente a ocho meses de la última remuneración mensual.

2. Sara Magdalena Reyes Ulloa:



PODER JUDICIAL

- a) **\$496.137.-** por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo
- b) **\$3.969.096.-** por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 7 años y 7 meses trabajados.
- c) **\$1.984.548.-** por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) **\$496.137.-** por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021.
- e) **\$3.969.096.-** por concepto de indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo equivalente a ocho meses de la última remuneración mensual.

3.- Claudia Maritza Rojas Ayala:

- a) **\$883.888.-** por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) **\$7.954.992.-** por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 9 años trabajados.
- c) **\$3.977.496.-** por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) **\$883.888.-** por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) **\$7.071.104.-** por concepto de indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo equivalente a ocho meses de la última remuneración mensual.

4.- Javier Héctor Matamala Arias:

- a) **\$869.837.-** por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) **\$6.958.696.-** por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 7 años y 7 meses trabajados.
- c) **\$3.479.348.-** por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) **\$869.837.-** por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) **\$6.958.696.-** por concepto de indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo equivalente a ocho meses de la última remuneración mensual.

5.- Albercio Bonifacio Aguayo Fernández:

- a) **\$354.153.-** por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) **\$2.124.918.-** por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 6 años y 5



PODER JUDICIAL

meses trabajados.

- c) **\$1.062.459.-** por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) **\$354.153.-** por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021
- e) **\$2.833.224.-** por concepto de indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo equivalente a ocho meses de la última remuneración mensual.

6.- Ángela Belen Navarro Aguayo:

- a) **\$834.547.-** por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) **\$6.676.376.-** por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondientes a los 7 años y 7 meses trabajados.
- c) **\$3.338.188.-** por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) **\$834.547** por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021.
- e) **\$6.676.376.-** por concepto de indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo equivalente a ocho meses de la última remuneración mensual.

7.- Luis Alberto Ferreira Garrido:

- a) **\$750.319.-** por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) **\$8.253.509.-** por concepto de Indemnización por años de servicio, correspondiente a los 11 años trabajados.
- c) **\$4.126.755.-** por concepto de Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.
- d) **\$750.319.-** por concepto de feriado legal correspondiente al periodo anual de vacaciones devengadas durante el periodo 2020 y 2021.
- e) **\$ 6.002.552.-** por concepto de indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo equivalente a ocho meses de la última remuneración mensual.

IX.- La demandada I. Municipalidad de Curanilahue deberá realizar una **publicación en redes sociales asociadas al ente edilicio** manifestando que **está comprometida en el cumplimiento del principio de no discriminación laboral**, haciendo mención del RIT de la presente causa; la que deberá realizarse dentro de quinto día contado desde que la presente sentencia se encuentre firme.

X.- Que, se rechaza en lo demás la demanda principal de folio 1.-



JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE CURANILAHUE

PODER JUDICIAL

XI.- Que, habiéndose **acogido la demanda principal**, **no se emitirá** pronunciamiento respecto de la acción subsidiaria.

XII.- Que, **no se condena en costas** a la demandada **por no haber sido totalmente vencida**.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT T-4-2022

RUC: 22-4-0381060-K

Dictada por **VIVIANA LORENA GARRIDO CABRERA**, Juez Suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue.



A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>